



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA



**LA DICTADURA CÍVICO MILITAR DEL GOBIERNO DE
ALBERTO FUJIMORI 1990-1992**

TESIS

PRESENTADA POR:

Bach. WILE EDWIN ESTAÑA HUALPA

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
LICENCIADO EN EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD DE
CIENCIAS SOCIALES**

PUNO – PERÚ

2020



DEDICATORIA

El presente trabajo es dedicado primeramente a Dios, mis padres y familia, quienes me apoyaron en cada una de mis metas.

Wile Edwin



AGRADECIMIENTOS

A mis docentes de la Facultad Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano.

A los docentes y cuerpo administrativo de la Facultad de Ciencias de la Educación, especialmente a los de la Escuela Profesional de Educación Secundaria, Especialidad de Ciencias Sociales, quienes nos brindaron sus conocimientos, exigencias y su apoyo para seguir adelante día a día en nuestra formación profesional.

A los miembros del jurado revisor de la investigación, ya que hicieron importantes aportaciones en la realización de la investigación.

Wile Edwin



ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTOS

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE TABLAS

INDICE DE ACRONIMOS

RESUMEN 9

ABSTRACT..... 10

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA..... 13

1.2.1. Problema general 13

1.2.2. Problemas específicos 13

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 14

1.3.1. Hipótesis general..... 14

1.3.2. Hipótesis específicas 14

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 14

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 15

1.5.1. Objetivo general..... 15

1.5.2. Objetivos específicos 15

CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1. ANTECEDENTES 16

2.2. MARCO TEÓRICO..... 19



2.2.1. Dictadura.....	19
2.2.2. Tipos de dictadura.....	20
2.2.2.1. Dictadura autoritaria	20
2.2.2.2. Dictadura totalitarista.....	21
2.2.2.3. Dictadura militar	22
2.2.3. Origen del neoliberalismo en el Perú 1990-1992	23
2.2.3.1 Crecimiento e inoperancia de la política económica neoliberal ...	27
2.2.3.2 Costos sociales del ajuste neoliberal.....	29
2.2.3.3 Carácter reprimario y anti-industrial del modelo neoliberal. 34	
2.3. MARCO CONCEPTUAL	35

CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. UBICACIÓN DEL ESTUDIO	38
3.2. PERIODO DE DURACIÓN.....	38
3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO	38
3.3.1. Tipo y técnica de investigación.....	38
3.3.2. Método de investigación	40
3.3.3. Diseño de investigación	41
3.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO	41
3.5. PROCEDIMIENTO	42
3.6. VARIABLES.....	42
3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	43

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS.....	44
-----------------------------	-----------



4.1.1. La dictadura cívico militar del gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1992.	44
4.1.2. Elecciones 1990	47
4.1.3. La violencia y el terrorismo en el gobierno de Alberto Fujimori 1990-1992.....	50
4.1.4. El nuevo orden económico y el neoliberalismo en el gobierno de Alberto Fujimori 1990-1992	61
4.1.5. El autogolpe y la dictadura cívico – militar en el gobierno de alberto fujimori, 1990-1992	66
4.2. DISCUSIÓN.....	69
V. CONCLUSIONES.....	71
VI. RECOMENDACIONES	73
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	74
ANEXOS.....	79

Área : Interdisciplinaridad en dinámica educativa: Ciencias Sociales

Tema : Historia nacional, regional y local.

Fecha de sustentación: 10 / Enero / 2020



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Unidad de investigación.	42
Tabla 2 Elecciones presidenciales 1990: primera vuelta, resultado nacional.....	49



INDICE DE ACRONIMOS

GEIN	: Grupo Especial de Inteligencia
DIRCOTE	: Dirección Contra el Terrorismo.
PCP-SL	: Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso
MRTA	: Movimiento Revolucionario Tupac Amaru
FBI	: Fondo Monetario Internacional
APRA	: Alianza Popular Revolucionaria Americana
FREDEMO	: Frente Democrático
INEI	: Instituto Nacional de Estadística e Informática
CONFIEP	: Empresarios Haciendo País
ONG	: Organismo No Gubernamental
EE.UU.	: Estados Unidos
FF.AA.	: Fuerzas Armadas



RESUMEN

Con la investigación se buscó la interpretación el régimen cívico militar del gobierno Alberto Fujimori Fujimori (1990 – 1992), la sociedad peruana está marcada históricamente por este tipo de gobiernos, con un fuerte componente caudillista. Muchas generaciones han crecido bajo regímenes dictatoriales o autoritarios, conducidos por gobiernos militares o civiles, liderados en ambos casos por caudillos, lo que ha sido gravitante en la formación de un tipo de cultura política y en el posterior ejercicio de una ciudadanía limitada. Por ello, consideramos pertinente estudiar, como un ejemplo de gestación y encumbramiento de una dictadura y de un caudillo, los dos primeros años de gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-1992), desde su inicial elección como primer mandatario, en julio de 1990, hasta la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en setiembre de 1992, pasando por el decisivo momento del autogolpe de Estado del 5 de abril de ese mismo año. La investigación es de **tipo** cualitativo, diseño histórico, nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales. Se utilizó como técnicas de exploración la biblioteca, Análisis de documentos, libros, revistas, artículos científicos, tesis, periódicos e informes. La hipótesis abarcadora: las consecuencias de la dictadura cívico militar en el gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1992, generó el autoritarismo.

Palabras Clave: ayllu, economía, sociopolítico, organización, reciprocidad.



ABSTRACT

The investigation sought the interpretation of the military civic regime of the government Alberto Fujimori Fujimori (1990 - 1992), Peruvian society is historically marked by this type of government, with a strong caudillista component. Many generations have grown under dictatorial or authoritarian regimes, led by military or civil governments, led in both cases by leaders, which has been gravitating in the formation of a type of political culture and in the subsequent exercise of a limited citizenship.¹ We consider it pertinent to study, as an example of gestation and encumbramiento of a dictatorship and a leader, the first two years of the government of former President Alberto Fujimori (1990-1992), since his initial election as first president, in July 1990, until the capture of the leader of the Shining Path, Abimael Guzmán, in September 1992, going through the decisive moment of the state self-coup on April 5 of that year. The research is of a qualitative type, historical design, allows us to study the facts of the past in order to find causal explanations to the manifestations of current societies. Library, document analysis, books, magazines, scientific articles, thesis, newspapers and reports were used as exploration techniques. The comprehensive hypothesis: the consequences of the military civic dictatorship in the government of Alberto Fujimori, 1990-1992, generated authoritarianism.

Keywords: ayllu, economy, sociopolitical, organization, reciprocity.



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La investigación se refiere al planteamiento del problema de la “la dictadura cívico militar del gobierno de Alberto Fujimori Fujimori 1990 - 1992”, investigación realizada por el interés a conocer sobre las consecuencias de la dictadura cívico militar, violencia, terrorismo, sistema económico, neoliberalismo autogolpe y dictadura del gobierno de Alberto Fujimori.

El inicio del gobierno de Fujimori es pertinente estudiar, como un ejemplo de gestación y encumbramiento de una dictadura y de un caudillo, los dos primeros años de gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-1992), desde su inicial elección como primer mandatario, en julio de 1990, hasta la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en setiembre de 1992, pasando por el decisivo momento del autogolpe de Estado del 5 de abril de ese mismo año.

Este breve e inicial período gubernamental tuvo características muy particulares que se manifestaron en dos aspectos centrales que sobrepasaron, por su impacto, su repercusión estrictamente coyuntural: 1) el cambio radical del modelo económico y la consecuente fundación de la legitimidad del Estado en el éxito y supremacía de la economía; y 2) la consolidación, desde el gobierno, de un discurso político anti-institucional y anti-partidario, y la consiguiente reconstrucción política autoritaria del poder político central. Asimismo, lo particularizan cuatro hechos de carácter más definidamente coyuntural, pero no por ello menos decisivos: 1) el renovado incremento de la violación de los derechos humanos; 2) la captura del líder del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, Abimael Guzmán; 3) la construcción de una amplia alianza de poderes fácticos; y 4) el mayoritario apoyo de la opinión pública al autogolpe de Estado.



Dicha coyuntura definió un escenario de cambios acelerados con efectos de larga duración, como se puede comprobar más de veinte años después del golpe del 5 de abril de 1992.

El trabajo de investigación está estructurado en lo siguiente: capítulo I. Introducción; II. Revisión de la literatura: Descripción del problema de investigación, definición del problema de investigación, Justificación, objetivos e hipótesis. III. Materiales y métodos de investigación.

En el sección IV. Resultados y discusiones, donde se contrasta los resultados obtenidos con aquellos antecedentes de la sección de Revisión de Literatura; Revisación de la literatura, basado en el sustento de antecedentes teórico sobre la dictadura cívico militar del gobierno de Alberto Fujimori Fujimori 1990 – 1992. En el capítulo V. conclusiones, VI. Recomendaciones y VIII. Referencias.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Entre 1990 y 1992 el Perú pasó un periodo de situaciones críticas en el ámbito político, económico y militar, que adquirió sus orígenes durante la década anterior. Tuvo sus comienzos, más precisamente, en el inicio de la acción armada de Sendero Luminoso (abril de 1980) y en la consiguiente respuesta política y militar del Estado. Solo unos años después, se agudizó esta situación excepcional con el agravamiento incesante de la crisis económica y el surgimiento imparable de la hiperinflación, sobre todo a partir de 1987-1988.

Una coyuntura de tensión extrema como la que vivió el país entre 1990 y el 1992 (o quizá, como se ha dicho, desde 1988 hasta 1992) abrió el espacio para que con el mayoritario apoyo de los peruanos se produjeran conductas extraordinarias y dictatoriales de los gobernantes, que violaron o dejaron en suspenso la Constitución Política, y que



pusieran por delante los intereses primarios del Estado en aras de impedir la creación de un nuevo orden estatal (en palabras de Sendero Luminoso “un nuevo estado”).

Vale la pena subrayar que en los momentos decisivos de esta coyuntura de excepcionalidad, entre 1990 y 1992, las fuerzas reformistas de izquierda o del centro llámese la Izquierda Unida y el Partido Aprista derrotadas, por crisis internas, por falta de una propuesta democrática realista, o por una desastrosa gestión de gobierno, tenían escasas posibilidades de enrumbar la situación en la perspectiva de un cambio democrático y gradual de la crisis.

La observación de los dos primeros años de Gobierno de Alberto Fujimori (1990-1992), desde su elección en julio de 1990 hasta la captura de Abimael Guzmán en setiembre de 1992, pasando por el decisivo autogolpe del 5 de abril de ese mismo año, permite explorar el tema y abordar el encumbramiento tanto de una dictadura como de un caudillo. Entre 1980 y 1990, crearon la coyuntura de excepción que el país vivió de 1990 a 1992, en particular en la fase inicial de la victoria electoral de Alberto Fujimori, las condiciones en las que se produjo y su instalación en el poder el 28 de julio de 1990.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema general

¿Cuáles fueron las consecuencias de la dictadura cívico militar del gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1992?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿Qué consecuencias generaron la violencia y el terrorismo en el gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1992?
- ¿Cómo se implementó el nuevo orden económico y el neoliberalismo en el gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1992?



- ¿Porque el autogolpe y la dictadura cívico – militar en el gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1992?.

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. Hipótesis general

Las consecuencias de la dictadura cívico militar en el gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1992, generó el autoritarismo.

1.3.2. Hipótesis específicas

- La violencia y el terrorismo en el gobierno de Alberto Fujimori 1990-1992, perjudicó negativamente a la población al estado y la nación peruana.
- El nuevo orden económico y el neoliberalismo en el gobierno de Alberto Fujimori 1990-1992, tuvo tendencia hacia el neoliberalismo.
- Con el autogolpe y la dictadura cívico – militar en el gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1992, se persiguió a los políticos y civiles.

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

La investigación toma importancia porque la década de los noventa hereda del periodo de los ochenta el agravamiento de los problemas estructurales del Perú: hiperinflación, guerra interna o terrorismo, plan de ajuste o fujishock, así como la aparición victoriosa de las agrupaciones o movimientos políticos independientes y el desmoronamiento de los partidos tradicionales, que merece analizar e interpretar a través de la investigación. Muchas generaciones han crecido bajo regímenes dictatoriales cívico militares o autoritarios, conducidos por gobiernos militares o civiles, liderados en ambos casos por caudillos, que estos acontecimientos sucintaron en los años de 1990 – 1992 con el gobierno de Alberto Fujimori.



La importancia de la investigación se sustenta en los estudios de los acontecimientos históricos que causaron crecientes consecuencias al país, que son la secuencia de cinco hechos principalmente: violencia y terrorismo, nuevo orden económico, el neoliberalismo, el autogolpe y la dictadura cívica – militar. El gobierno de Fujimori al inaugurar su gestión mantuvo una eficaz lucha antiinflacionaria y antisubversiva, logrando estabilidad económica y política en el país. Sin embargo, al poco tiempo su gobierno se convirtió en un régimen dictatorial y trajo consigo un alto grado de corrupción organizada entre los altos funcionarios de Estado peruano.

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1. Objetivo general

Analizar las consecuencias de la dictadura cívico militar del gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1992.

1.5.2. Objetivos específicos

- Interpretar la violencia y el terrorismo en el gobierno de Alberto Fujimori 1990-1992.
- Analizar el nuevo orden económico y el neoliberalismo en el gobierno de Alberto Fujimori 1990-1992.
- Describir el autogolpe y la dictadura cívico – militar en el gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1992.



CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1. ANTECEDENTES

Pedraglio (2014), el tipo de investigación es cualitativa. La reconstitución del Estado es el autoritarismo, entendido no solo como el uso de la violencia y de una conducción vertical y personalista del Estado, sino como el recurso permanente a la excepcionalidad como razón, excusa o fuente del orden estatal y social. De manera sistemática, el autoritarismo y la excepcionalidad han también sido aceptados y practicados por los tres gobiernos elegidos democráticamente que han sucedido al fujimorismo. Baste con revisar el uso de la fuerza en los conflictos sociales y el número de personas muertas o heridas que estos conflictos trajeron como consecuencia; más aún, cómo la derecha económica, política y mediática logra arrinconar rápidamente a los gobiernos de turno ante situaciones de tensión, induciendo a reeditar la excepcionalidad a menudo con la excusa de que detrás de toda protesta se encuentra la subversión, encarnada en Sendero Luminoso, en el nacionalismo humanista (cuando era oposición), y ahora en el Movadef e incluso en Patria Roja.

Villegas (2011) el tipo de investigación fue cualitativa, Llegó a la siguiente conclusión podemos decir que el gobierno de Alberto Fujimori quería legitimarse por el Referéndum en cuanto a su actividad política. Pero este fue hecho siguiendo las recomendaciones internacionales de Estados Unidos, los países europeos y la OEA. Le aceptaron que cambiara el marco constitucional para salir de la crisis política y económica que dejó Alan García entre 1985-1990. Fujimori pensaba que podía obtener un apoyo total de la ciudadanía a su proyecto constitucional pero la oposición se encargó de criticar y explicar los puntos en contra de esta constitución como la derogación de los derechos sociales conquistados y puestos en la Constitución de 1979. Fue en este contexto político



de búsqueda de aprobación del Referéndum de 1993 que Fujimori trató de aprovechar políticamente las cartas de Guzmán pidiendo un Acuerdo de Paz. Sin embargo, Fujimori quería publicitar su imagen de vencedor de la subversión, pero, más adelante, éste fue descubierto por la ciudadanía como un aprovechamiento político para la campaña por el SI del gobierno.

Gonzáles (2004) el tipo de investigación cualitativo, el objetivo de la investigación fue demostrar el período fujimorista y su incidente en la historia peruana del siglo XX. Hijo de padres japoneses -origen ciertamente exótico para un latino- el ex presidente peruano es con toda probabilidad un auténtico producto de Perú; básicamente un “criollo”, según la acepción que casi todo peruano conoce. Llegó a la siguiente conclusión en nuestra interpretación de los hechos consideramos que tanto la irrupción política de Fujimori, en 1990, como la ruptura del ordenamiento institucional, en abril de 1992, son acontecimientos que se insertan dentro de la lógica de un contexto de crisis social y económica y de debilidad manifiesta de las instituciones y organizaciones político institucionales del régimen democrático. En este sentido, Fujimori, y lo que representa, no es un fenómeno aislado en la historia peruana, sino, y a pesar de su origen oriental, un producto netamente “criollo”; ninguno de sus rivales políticos supo, en 1990, interpretar mejor que él la situación peruana, aprovechando la oportunidad real que se le ofrecía.

Butron, (2018) el objetivo general de la investigación fue Indicar cuál fue la reacción de la sociedad arequipeña en relación al proceso de privatización en Arequipa entre 1980 y 2002. Como hipótesis general El comportamiento de la sociedad arequipeña alrededor del proceso de privatización en Arequipa, probablemente se manifestó en base a las particulares características geográficas, económicas, sociales, culturales y políticas de Arequipa y la coyuntura económica, social y política reinante del Perú de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. La metodología de investigación plateada fue El



presente trabajo se define como una investigación de carácter descriptivo explicativo en tanto desea conocer los componentes de una realidad específica, cuyos resultados solo son aplicables al caso en estudio. Llego a la siguiente conclusión Existe relación directa entre la implementación y consolidación del Neoliberalismo y el proceso de privatización de empresas en América Latina con las protestas acontecidas en su territorio durante los últimos años del siglo XX e inicios del siglo XXI. Los resultados dispares que provoco el paradigma neoliberal determinaron que en esta parte del mundo se originasen numerosas protestas, los ejemplos más resaltantes de ello fueron el movimiento social de Caracas-Venezuela en 1989 y el movimiento social en la República de Argentina en el año 2001.

Arce (2011) el objetivo general de la presente investigación es analizar la naturaleza de las relaciones civiles - militares en el Perú durante el periodo comprendido entre la última transición a la democracia, y los dos siguientes gobiernos democráticos (2001-2010). La pregunta central que guiará este trabajo será la siguiente: ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones civiles-militares en el Perú actual? Método de investigación cualitativo. Llegó a la conclusión siguiente las consecuencias que dejó el proceso de violencia política en el Perú impiden una correcta normalización democrática de las relaciones civiles - militares, deberemos resaltar el hecho de que la instalación de una Comisión de la Verdad y la posterior judicialización de violaciones de derechos humanos –elementos claves de todo proceso de justicia transicional, junto a las reparaciones para las víctimas y las iniciativas por preservar la memoria histórica– cometidas por efectivos militares durante el conflicto armado interno, han sido ciertamente elementos que han influido en los niveles de conflictividad civil-militar y, por ende, han evitado una adecuada normalización de dichas relaciones.



Gamero (2008) en su artículo de investigación llegó a la conclusión siguiente la verdad, la gran verdad es que un 12 de julio de 1993, en medio de la agitación y violencia que se vivía en el país, la revista Oiga publicaba una denuncia periodística que tituló: Historia de una traición o el "Plan Verde". Fue un documento que marcó el inicio de una de las peores dictaduras de la historia, la de Fujimori. El exterminio de lo que ellos denominaban excedente poblacional o excedentes poblacionales nocivos fue tal vez uno de los puntos más controvertidos. Tales estrategias se llevaron a cabo en las zonas andinas y en la amazonia peruana. Los familiares de las víctimas reclaman justicia y reparación de algo irreparable. Mientras, los seguidores del ex presidente se empeñan cínicamente en continuar negando la responsabilidad de Fujimori y quieren seguir creyendo que su líder era un gran presidente.

2.2. MARCO TEÓRICO

2.2.1. Dictadura

Es un régimen político en el cual la autoridad del Estado se concentra en una sola persona (o grupo), que no legitima sus decisiones. En toda forma dictatorial de gobierno la autoridad política está concentrada en un solo hombre o en un pequeño grupo. El término se usa para describir formas modernas de absolutismo, a veces disimulado tras una fachada de instituciones democráticas y constitucionales. Yo defino Dictadura como “el gobierno creativo de un individuo o de unos pocos, que ejecuta lo necesario sin legitimidad”. El totalitarismo es una forma autocrática todavía más radical y extrema, es duradera y absolutista (Neira, 2019, pág. 03).

Afirma Neira (2019), que las dictaduras se caracterizan por tres cosas:

- a) En ellas el ejército desempeña un papel independiente del partido o los partidos, pero papel decisivo para la totalidad del Estado, y que está en el centro de la burocracia.



- b) Suelen tener carácter temporal o transitorio, sin ánimo de perpetuarse (como sí lo son todos los gobiernos totalitarios).
- c) La transformación que intentan de la sociedad no la apoyan en una estricta base utópica-ideológica (como sí lo hacen los totalitarismos).

Para el concepto de dictadura sería más esclarecedor retornar a sus orígenes etimológicos romanos: la dictadura es una interrupción temporal de la vigencia de las instituciones legales, asumiendo, en el ínterin, el poder un individuo o grupo de individuos revestidos de una potestad legislativa que excede el ámbito normal de competencia del legislador en el marco de un Estado de derecho dotado de un sistema constitucional (Peña, 2009, pág. 19).

Describen la Dictadura como un gobierno que suspende o viola temporalmente las normas constitucionales sobre el acceso y ejercicio de la autoridad. De esta forma, reserva el término para gobiernos interinos de crisis, generalmente de carácter militar, que se han legitimado a sí mismos y que representan una ruptura con las normas institucionalizadas para el acceso y ejercicio del poder del régimen anterior, sea democrático o tradicional. Bajo esas circunstancias el ejército no crea, o por lo menos no trata de crear un nuevo régimen, sino que pretende instaurar un régimen de excepción interino, percepción que tiene mucho de común con el concepto romano de Dictadura (Linz, 1986, pág. 03).

2.2.2. Tipos de dictadura

2.2.2.1. Dictadura autoritaria

A los regímenes autoritarios también se les llama “autocracias”. A grandes rasgos se habla de regímenes autoritarios para indicar toda la clase de regímenes antidemocráticos. Los regímenes autoritarios se caracterizan por la ausencia del parlamento y de elecciones populares o, cuando estas instituciones quedan con vida, por



su reducción a meros procedimientos ceremoniales y por el indiscutible predominio del órgano ejecutivo (Ortiz, 2014, pág. 2).

Según Ortiz (2014), otros rasgos del autoritarismo son prohibir el pluralismo de los partidos o reducirlo a un simulacro sin incidencia real, restringir la expresión de ideas políticas opuestas (la oposición), destruir la independencia de los demás grupos políticamente relevantes o bien tolerarlos tolerada mientras no perturben la posición de poder del jefe o de la élite gobernante. Las ideologías autoritarias se caracterizan por negar en mayor o menor medida la igualdad entre las personas, dan gran importancia a la jerarquía, propugnan formas de regímenes autoritarios y a menudo exaltan algunos elementos de la personalidad autoritaria como si fueran virtudes.

El autoritarismo es un tipo de régimen en el cual la concentración de la autoridad política recae en un hombre o un pequeño grupo (Plano, 1967, pág. 10). Hay distintas formas o sistemas políticos en los cuales, es muy diferente la concentración de la autoridad en un solo ente. Entre los más conocidos tipos de autoritarismo están: totalitarismo, dictadura, monarquía, absolutismo, tiranía, gobiernos militares, despotismo y muchas otras derivaciones de éstos como son el patrimonialismo, fascismo o nazismo.

2.2.2.2. Dictadura totalitarista

El totalitarismo es lo opuesto al autoritarismo. A diferencia del primero, en el totalitarismo se busca el apoyo de las masas, la aceptación y legitimidad, aunque luego usen el poder para erradicar cualquier tipo de disidencia a menudo con prácticas del terror. En esta dictadura la ideología propia está bien elaborada y tiene un marco de actuación muy amplio dentro de la sociedad como son la cultura, la economía, los valores, costumbres y la religión. El poder está concentrado igualmente en una sola persona esbozando un culto de idolatría hacia esa figura denominada líder. Otro elemento



distintivo es que el totalitarismo busca cambiar radicalmente la mentalidad de sus ciudadanos, eliminar cualquier otro tipo de pensamiento y crear una nueva identidad que les permita tenerlos controlados de manera psicológica (Haykal, 2019, pág. 7)

Totalitarismo es el término por el que se conoce a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones (Menze, 1981).

Para Menze (1981), los totalitarismos, o regímenes totalitarios, se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica como partido único y se funde con las instituciones del Estado. Por lo general, estos regímenes exaltan la figura de un personaje que tiene un poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad (con el propósito de formar una persona nueva en una sociedad perfecta), y hacen uso intenso de la propaganda y de distintos mecanismos de control social y de represión como la policía secreta

2.2.2.3. Dictadura militar

Un gobierno militar es un tipo de gobierno cuyo Estado es encabezado por uno o más militares. Los gobiernos militares son establecidos mediante formas ajenas a la constitucional, ya sea en reacción a una crisis de un gobierno tomándolo en sitio, como por un golpe de Estado por diversos motivos a no ser que se trate de sociedades militaristas. En la mayoría de los casos se han podido imponer estos gobiernos porque una gran parte o al menos una mayoría de los miembros de las fuerzas armadas del país correspondiente apoyaban la causa, motivada por un gobierno civil que toma decisiones con las que los militares no están de acuerdo (Tannahill, 1976, pág. 9).



Las dictaduras militares casi siempre serán expresión de alianzas entre civiles y militares. La presencia civil se manifestará a través de tecnócratas (algunos de ellos con vínculos directos con los sectores empresariales) o de dirigencias políticas de partidos derechistas o de los que han sido creados por los mismas fuerzas armadas (Figuroa, 2018, pág. 10).

2.2.3. Origen del neoliberalismo en el Perú 1990-1992

En agosto de 1990 el gobierno de Fujimori inició la aplicación del programa neoliberal del Consenso de Washington, en un contexto internacional favorable -contrario al de los 80-, caracterizado por el retorno de los créditos externos, la reducción de las tasas de interés internacional, y el dominio ideológico del mercado libre y de la consecuente eliminación de la intervención económica del Estado. Dado que, según este Consenso, los recursos deben asignarse sólo a través del mercado, el Estado debe ser neutral, debe privatizar sus empresas y algunos servicios (seguridad social, educación, etc.) y debe redefinir su tamaño en función del principio de la austeridad y el equilibrio presupuestal. El propósito del programa neoliberal fue así sentar las bases de un nuevo patrón de crecimiento y acumulación (Jiménez, 2019, pág. 140).

La aplicación del programa neoliberal por el régimen fujimorista, truncó el proceso de industrialización al atrasar el tipo de cambio de manera espectacular, al erosionar el papel de la demanda interna en la reactivación del mercado interno, al encarecer el crédito y, en general, al aumentar los costos industriales de producción. Con esta estructura de precios no sólo se favoreció la producción exportable tradicional primaria con ventajas naturales, sino también la producción de bienes y servicios no transables, como la Construcción y el Comercio, sectores sensibles al crédito doméstico. Pero, la expansión de este crédito que originó un boom de la Construcción sin precedentes en el último medio siglo, no fue, como veremos más adelante, resultado de la política económica.



Para Davidson, (2003) el neoliberalismo se fue implementado en América Latina fundamentalmente a través de lo que se llamó el “Consenso de Washington”, el cual estuvo basado en tres grandes ideas: disciplina macroeconómica, economía de mercado y apertura al mundo. “El origen histórico de lo que hoy se conoce como neoliberalismo económico se remonta a los desarrollos teóricos clásicos franceses e ingleses del siglo XVIII. Con Adam Smith se da inicio a una reflexión autónoma de la sociedad basada en la explicación de la existencia y funcionamiento del mercado. A su vez, es con el trabajo de dicho teórico clásico que se imponen el atomismo, el automatismo y el utilitarismo, que caracterizan hoy al análisis neoliberal” (Gaviria, 1992, pág. 9).

Después, en la década de 1970, la región latinoamericana comienza a endeudarse con los organismos internacionales y cuando estalla la crisis de la década de 1980 las políticas del Consenso de Washington se convierten en el paradigma de condicionantes que los países tenían que aceptar para acceder a las “herramientas económicas” o a los préstamos de los organismos internacionales, a su vez también se convirtió en una –quizá en la única– opción que los países latinoamericanos tenían para salir del bache económico. No obstante, la aceptación del decálogo se vio reforzada por el auge económico sostenido que Chile logró en la década de 1990 (Martínez & Reyes, 2012, pág. 61).

América Latina aceptó y puso en marcha las reformas del Consenso de Washington debido a que los organismos internacionales eran sus principales acreedores, lo cual representó paralelamente un detonante para que las políticas neoliberales se instauraran en América Latina.

La agenda estadounidense de políticas económicas pone de manifiesto que en términos económicos y sociales las políticas neoliberales no han funcionado para el



desarrollo de América Latina. Ante esta situación, salta a la vista la necesidad de crear una agenda para responder a los problemas más apremiantes del contexto latinoamericano (Martínez & Reyes, 2012, pág. 61).

A finales de la década de 1990 diversos países latinoamericanos comenzaron a preocuparse por la creación de políticas económicas dirigidas y diseñadas bajo el contexto latinoamericano, países como Chile y Brasil han puesto énfasis en el diseño de herramientas económicas que contribuyan al desarrollo de América Latina. Otros, como Venezuela, por ejemplo, han liquidado sus deudas con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como rechazo a la serie de condiciones para acceder a los préstamos o rescates financieros.

En agosto de 1990 el gobierno de Fujimori inició la aplicación del programa neoliberal del Consenso de Washington, en un contexto internacional favorable contrario al de los 80, caracterizado por el retorno de los créditos externos, la reducción de las tasas de interés internacional, y el dominio ideológico del mercado libre y de la consecuente eliminación de la intervención económica del Estado. Dado que según este Consenso los recursos deben asignarse sólo a través del mercado, el Estado debe ser neutral, debe privatizar sus empresas y algunos servicios (seguridad social, educación, etc.), y debe redefinir su tamaño en función del principio de la austeridad y el equilibrio presupuestal. El propósito del programa neoliberal fue así sentar las bases de un nuevo patrón de crecimiento y acumulación (Jiménez, 2001, pág. 146).

En 1990, el “péndulo peruano” se movió del populismo heterodoxo al neoliberalismo ortodoxo (Gonzales & Samame, 1994). Fue el año del “turning-point” de un modelo económico y de un tipo de estado que habían llegado a su agotamiento. A partir de entonces, el Perú entraría en la era “neoliberal” en lo económico, que los cuatro



gobiernos que se han sucedido han mantenido en sus principios básicos. Pero también, en 1992, se movió el péndulo político: de la democracia al autoritarismo, pues el gobierno de Alberto Fujimori disolvió el Congreso y gobernó con un régimen que fue calificado de “democradura” (Lopez, 1993). Sólo después de 10 años, en septiembre del 2000, el “fujimorato” cayó estrepitosamente bajo el signo de la corrupción, la crisis económica y política. Se instaló así un gobierno de transición que, bajo la experimentada y diestra mano del Presidente Paniagua, logró el retorno a una democracia plena y a elecciones en 2001, que hasta ahora se ha mantenido.

Afirma Jiménez (2001), la estructura de precios relativos que configuró la aplicación por el régimen fujimorista del programa neoliberal truncó el proceso de industrialización al atrasar el tipo de cambio de manera espectacular, al erosionar el papel de la demanda interna en la reactivación del mercado interno, al encarecer el crédito y, en general, al aumentar los costos industriales de producción. Con esta estructura de precios no sólo se favoreció a la producción exportable tradicional primaria con ventajas naturales, sino también a la producción de bienes y servicios no transables como la construcción y el comercio, sectores sensibles al crédito doméstico. Pero la expansión de este crédito que originó un boom de la construcción sin precedentes en el último medio siglo no fue, como veremos más adelante, resultado de la política económica.

Las privatizaciones, parte importante de las llamadas reformas estructurales del sistema neoliberal, tampoco tuvieron un efecto expansivo directo en la producción. Por ejemplo, como resultado de las privatizaciones en energía eléctrica y en telefonía, pagamos tarifas de monopolio que no sólo perjudican a los consumidores sino también a la empresa privada nacional por sus efectos en los costos de producción. Lo mismo ocurre con el precio del galón de gasolina, cuyo precio es más o menos dos veces el precio internacional. Con un tipo de cambio atrasado y tarifas públicas caras hemos perdido



competitividad en los mercados internacionales y, lo que es peor, hemos empeorado nuestra posición comercial frente a algunos países de la Comunidad Andina.

Durante la década de los 90 ha sufrido un retroceso del que la aplicación de la política económica neoliberal y las leyes socialmente injustas han sido las responsables. El avance social de décadas fue parcialmente pulverizado en pocos años. A diferencia del seguro contra el desempleo que ampara a los trabajadores en ciertos países, en el Perú no sólo no existe tal seguro sino que en la presente década se incorporó el despido injustificado de trabajadores, además de limitar el monto de despido en 12 remuneraciones mensuales, lo que perjudica a los trabajadores más antiguos (Reyes, 2018, pág. 70).

2.2.3.1 Crecimiento e inoperancia de la política económica neoliberal

Duárez (2016) de los casi diez años de fujimorismo neoliberal, sólo cuatro fueron de crecimiento (1993, 1994, 1995 y 1997), y los otros seis, como el actual, de recesión. Pero los cuatro años de crecimiento económico tienen muy poco o casi nada que ver con las políticas macroeconómicas y las llamadas reformas estructurales de este régimen. En otras palabras, el crecimiento económico de esos años se produjo a pesar de la política neoliberal. En primer lugar, la política macroeconómica atrasó el tipo de cambio real al mismo tiempo que se liberalizó el comercio simultáneamente con el mercado financiero y la cuenta de capitales. Entre enero de 1993 y diciembre de 1997, el tipo de cambio real se mantuvo en un valor promedio equivalente a sólo el 44,5% de su nivel registrado en julio de 1985, con una desviación estándar de 1.61. Ese tipo de cambio promedio representa sólo el 24,2% del que se alcanzó en julio de 1987. Cuando el período se extiende de enero de 1993 a julio de 1999, el tipo de cambio promedio aumenta ligeramente hasta un valor equivalente al 44,9% del registrado en julio de 1985 (véase Cuadro 4). El aumento de su desviación estándar (1,81) es también poco significativo.



Esto quiere decir que el aumento reciente en el tipo de cambio real, por las presiones devaluatorias de la fuga de capitales, es como una gota de agua en el desierto. ¿Puede alguien afirmar que con este tipo de cambio se estimuló el crecimiento de la producción y de las exportaciones? La apertura comercial y cerca de diez años de atraso cambiario afectaron a la industria al aumentar relativamente sus costos de producción, haciéndole perder competitividad. Pero como ya se mencionó, el atraso cambiario y la apertura comercial también originaron consecutivo déficit comerciales en todos los años de este régimen, al desestimular las exportaciones no-tradicionales y abaratar las importaciones. Cuando la balanza comercial es deficitaria, disminuye la demanda agregada y consecuentemente la producción.

Por lo tanto, las políticas cambiaria y comercial no pueden ser responsables de crecimiento económico alguno. En segundo lugar, el crecimiento tampoco tuvo que ver con la política fiscal, cuya orientación fundamental fue servir la deuda externa. No pueden producir crecimiento nueve años consecutivos de generación de superávit fiscal primario. En los cursos elementales de economía se aprende que los superávit fiscales contraen la demanda agregada y, por tanto, la producción. El superávit primario de los años 1991-1993 y 1996-1998 fue, en promedio, equivalente al 1,3% del PBI. Únicamente durante los años de la llamada “fiesta fiscal reeleccionista”, 1994 y 1995, el porcentaje del superávit primario bajó a 0,9% y a 0,3% respectivamente. En consecuencia, no se puede asociar el crecimiento a la política fiscal de creación de superávit primarios. En tercer lugar, tampoco puede adjudicarse a la política monetaria el crecimiento de los años 1993, 1994, 1995 y 1997. En este caso no hay manera de identificar el mecanismo de transmisión que expandió la demanda agregada y, por tanto, la producción.

La política monetaria restrictiva que caracteriza a este régimen encareció el crédito. El crédito caro, como sugiere el sentido común, tiene un efecto recesivo y no expansivo



en la producción. Como veremos más adelante, el costo del crédito disminuye sólo en el período de entrada masiva de capitales extranjeros. Por último, las privatizaciones, parte importante de las llamadas reformas estructurales, tampoco tuvieron un efecto expansivo directo en la producción. Por ejemplo, como resultado de las privatizaciones en energía eléctrica y en telefonía, pagamos tarifas de monopolio que no sólo perjudican a los consumidores sino también a la empresa privada nacional por sus efectos en los costos de producción. Lo mismo ocurre con el precio del galón de gasolina, cuyo precio es más o menos dos veces el precio internacional. Con un tipo de cambio atrasado y tarifas públicas caras hemos perdido competitividad en los mercados internacionales y, lo que es peor, hemos empeorado nuestra posición comercial frente a algunos países de la Comunidad Andina.

2.2.3.2 Costos sociales del ajuste neoliberal

Duárez (2016) Una de las más importantes consecuencias de la aplicación del programa de ajuste estructural y de las políticas macroeconómicas neoliberales fue su efecto reducido en la creación de empleos y en la calidad del empleo. Precisamente durante los años de crecimiento económico, 1993-1997, el empleo crece a una tasa de 4,9% promedio anual. Hasta 1992 la población económicamente activa (PEA) ocupada de Lima Metropolitana permaneció prácticamente invariable, mientras que el porcentaje del empleo total respecto de la población en edad de trabajar había caído desde una cifra cercana al 54% hasta alcanzar su punto más bajo, aproximadamente 49%, en 1992. Con este crecimiento del empleo, el porcentaje de desempleo en Lima Metropolitana disminuye de 9,5% en 1992 a 7,1% en 1995. Pero después, con la desaceleración de la economía, vuelve a aumentar a 9,0% en 1997 y a 10% el primer trimestre del presente año. Por otro lado, el porcentaje de desempleo urbano total nacional asciende ahora a 9,8% y, es mayor que el de 1990 (8,3%) y que el de 1992 (9,4%). Estas fluctuaciones de



la tasa de desempleo revelan el carácter inestable de los puestos de trabajo generados durante el ajuste neoliberal. No obstante el aumento del empleo en los años 1993-1997, no se puede afirmar que el régimen neoliberal exhibe como un logro la reducción de la tasa de desempleo del período anterior a la década de los años '90. Mientras el promedio de desempleo entre 1986 y 1988 fue de 5,5%, este promedio asciende a 8,6% entre 1992 y 1997. Si no se puede afirmar que este aumento del desempleo se debe a un aumento de la tasa de actividad, como se señala en Saavedra (1998), es claro que el modelo basado en el liderazgo de los sectores primarios y no transables como la construcción, fue incapaz, no obstante su vigencia de más de nueve años, no sólo de mantener el porcentaje de desempleo que heredó, sino de crear puestos de trabajo a tasas capaces de absorber a las 260.000 personas que anualmente se incorporan al mercado de trabajo en el Perú Urbano³.

La magnitud del empleo en las empresas de cien y más trabajadores se mantuvo por debajo del existente en los años de 1990-1991. La llamada flexibilización del mercado de trabajo ha vuelto más precaria la retención de los puestos de trabajo. La probabilidad del desempleo se incrementa para los trabajadores más jóvenes y para los que sobrepasan los 45 años. La explicación a este fenómeno es que con el proceso de reforma estructural se hacen obsoletas las calificaciones provenientes del entorno económico anterior (Saavedra, 1998: pp.17-18). Es verdad que el empleo aumentó durante los años de crecimiento económico, fundamentalmente en el sector privado del Perú Urbano Nacional, a una tasa de 5% promedio anual entre 1991-1997 que compensó la contracción del empleo en el sector público a una tasa de -6,0% anual. Pero este aumento se debió fundamentalmente al crecimiento del empleo informal⁴. En efecto, el régimen neoliberal se inicia en 1990 con un empleo informal que representa el 52,0% del empleo total, y en lugar de reducirlo lo incrementó hasta alcanzar la cifra de 56,9% en 1997. Aún si del



conjunto del empleo se sustrajera, como lo hace Saavedra (1998), a aquellos trabajadores que cumplen con las regulaciones o que trabajan en empresas con las que tienen vínculos que se adecuan a las regulaciones, el porcentaje de empleo informal (54,0%) durante los años de crecimiento 1993-1997 ni siquiera se situó por debajo del registrado entre 1986 y 1987(55,1%), dos años de crecimiento económico en la década de los '80. El modelo neoliberal no ha reducido por lo tanto los empleos de refugio, de mala calidad y precarios por ser inestables y carentes de beneficios sociales. Además pertenece a un sector con escasas o nulas posibilidades de modernización por sus bajas remuneraciones y productividades.

Una economía que no descansa en el dinamismo de la demanda interna y en particular del consumo privado, tiene el camino expedito para ajustar el mercado de trabajo mediante la llamada flexibilidad salarial, es decir, ajustando los ingresos de los trabajadores hacia abajo, sin límite legal alguno que lo evite compulsivamente. El salario mínimo se congeló en términos nominales entre 1991 y 1995. Después del shock de agosto de 1990 los ingresos reales mensuales de los trabajadores formales e informales se recuperan con la desinflación de los años siguientes. Los ingresos de los trabajadores formales muestran una tendencia creciente recién entre 1993 y 1995, período en el que aumentan a una tasa de 10,0% promedio anual. Después, entre 1996 y 1998, la tendencia es ligeramente decreciente. En cambio, después de su recuperación en 1991-1992, los ingresos reales de los trabajadores informales permanecen casi constantes o con una tendencia ligeramente decreciente. En resumen, los ingresos reales en los años '90 de trabajadores formales e informales no han recuperado sus altos niveles registrados durante la reactivación económica de 1986-1987. En particular, los salarios reales se estancaron en el nivel que alcanzaron en 1989, que a su vez constituía sólo el 67% del registrado en 1985. En concordancia con el patrón de crecimiento de los años '90, el



reducido crecimiento del empleo se concentró en los sectores de la construcción, cuya participación en el empleo pasó de 3,8% en 1993 a 5,0% en 1997; comercio, restaurantes y hoteles, que pasó de 21,3% en 1993 a 26,8% en 1994 para luego disminuir a 21,2% en 1997; y agricultura, caza, silvicultura y pesca, que pasó de 31,8% en 1993 a 34,5% en 1997. La participación de la manufactura en el empleo se redujo de 12,6% en 1993 a 11,1% en 1997. Este tipo de crecimiento y distribución del empleo también revela su precariedad temporal. Los empleos permanentes disminuyeron de un 80% del empleo asalariado formal en 1991 a 39% en 1997. Si se considera que el asalariamiento formal (público y privado) es del orden de 45% del empleo total, el porcentaje de trabajadores con una relación formal permanente disminuyó de 36% del total de trabajadores a la cifra inverosímil de 18%. Con la desregulación del mercado de trabajo se redujo el costo de despido y se intensificó la modalidad de contrataciones y subcontrataciones a través de los llamados Services.

Por lo demás, el propio gobierno estimuló los contratos de formación laboral juvenil y los contratos de prácticas pre-profesionales, ciertamente con bajos ingresos. Con los ajustes y políticas neoliberales, la magnitud del aseguramiento en salud ha disminuido en las distintas modalidades de seguros públicos y privados. El porcentaje de personas con seguro de salud disminuyó de 37,7% en 1994 a 23,5% en 1997. La población con seguro privado, además de EsSalud, es la que sufrió la mayor disminución entre 1994 y 1997: a más de la mitad. EsSalud disminuyó en algo más de un tercio y los que sólo tenían seguro privado disminuyeron en casi un tercio (Petretera y Cordero, 1999: p. 218). La desregulación del mercado de trabajo tal como se dio en el país, y los bajos ingresos, son por lo tanto responsables de la disminución dramática del porcentaje de la población económicamente activa que cuenta con seguro social. El régimen neoliberal heredó en 1990 un 47,6% de PEA asegurada para después reducirlo sistemáticamente hasta el 27,1%



en 1998. Compárese con el porcentaje registrado en 1987 (41,2%). Los que perdieron su empleo formal y pasaron a la informalidad “pudieron mantener su estatus de asegurado a EsSalud, aportando directamente un 9% del nuevo ingreso, pero ello no ocurrió, aún con la reactivación de la economía peruana que se dio entre los años 1993-1997” (Petrera y Cordero, 1999: p. 220). Por otro lado, con el crecimiento de los años ‘90 la pobreza no se ha reducido. En 1985 representaba el 41,0% de la población. Subió a 53,0% en 1995, año que siguió al shock, y sólo disminuyó a 51,0% en 1997. Según ENNIV de 1997, este último porcentaje equivale a un poco más de 12 millones de personas. Ciertamente, la mayor incidencia de pobreza se encuentra en las familias de la sierra rural, donde parece haberse reducido ligeramente en términos relativos respecto a 1985. Le siguen las familias de la selva rural donde la pobreza ha aumentado. Entre los otros grupos que contribuyeron al aumento de la pobreza respecto a 1985 están las familias de Lima y de la sierra urbana (Figuroa, 1998).

La proporción del gasto público en salud y educación respecto del PBI muestra que la principal preocupación del régimen neoliberal no fue la condición de vida de la población del país. Durante 1990-1991 dicha proporción era de 2,3%, la más baja de América Latina. Durante 1996 y 1997, luego del crecimiento económico notable de 1993-1995, dicho porcentaje sube a 5,8% (Iguñiz, 1999). El gasto en educación sube de 2,4% en 1992 a 3,1% en 1997, para disminuir en 1998 a 2,9% del PBI. Si se examina la composición de este gasto público, los de inversión en el sector social aumentaron notablemente en los años ‘90. En 1985-1987 el promedio de participación era de 15%, para luego subir a más de 20% a partir de 1994, debido principalmente a la mayor inversión en locales escolares (Figuroa, 1998). Esto es totalmente compatible con el boom de la construcción analizado aquí. La mayor incidencia relativa del gasto en locales escolares no tiene un impacto directo en la calidad de la educación si se toma en cuenta



el empobrecimiento de los profesores, que el promedio de alumnos por maestro está entre los más altos del subcontinente, y que las horas de escuela están entre las más bajas (Iguñiz, 1999). El régimen neoliberal no tiene estrategia alguna de ganancias de ventajas competitivas para insertar al país en mejores condiciones en el mundo globalizado actual.

2.2.3.3 Carácter reprima rizador y anti-industrial del modelo neoliberal

Duárez (2016) En agosto de 1990 el gobierno de Fujimori inició la aplicación del programa neoliberal del Consenso de Washington, en un contexto internacional favorable - contrario al de los '80-, caracterizado por el retorno de los créditos externos, la reducción de las tasas de interés internacional, y el dominio ideológico del mercado libre y de la consecuente eliminación de la intervención económica del Estado. Dado que según este Consenso los recursos deben asignarse sólo a través del mercado, el Estado debe ser neutral, debe privatizar sus empresas y algunos servicios (seguridad social, educación, etc.), y debe redefinir su tamaño en función del principio de la austeridad y el equilibrio presupuestal. El propósito del programa neoliberal fue así sentar las bases de un nuevo patrón de crecimiento y acumulación. La estructura de precios relativos que configuró la aplicación por el régimen fujimorista del programa neoliberal truncó el proceso de industrialización al atrasar el tipo de cambio de manera espectacular, al erosionar el papel de la demanda interna en la reactivación del mercado interno, al encarecer el crédito y, en general, al aumentar los costos industriales de producción. Con esta estructura de precios no sólo se favoreció a la producción exportable tradicional primaria con ventajas naturales, sino también a la producción de bienes y servicios no transables como la construcción y el comercio, sectores sensibles al crédito doméstico. Pero la expansión de este crédito que originó un boom de la construcción sin precedentes en el último medio siglo no fue, como veremos más adelante, resultado de la política económica. De acuerdo con la composición del crecimiento del PBI para el período 1993- 1997, que incluye los



cuatro años de crecimiento económico, los sectores que registraron tasas notoriamente superiores a la del PBI (41,1%) fueron la construcción (106,2%), el comercio (48,2%) y la minería metálica (48,5%) (véase Cuadro 1). La

recuperación del sector minería desde 1993 es notable. Ocurre después de siete años de consecutivas disminuciones en los niveles de su producción. En pesca se registran las tasas de crecimiento más altas durante 1993-1994 (56,0%).

2.3. MARCO CONCEPTUAL

Dictadura: Es como “el gobierno creativo de un individuo o de unos pocos, que ejecuta lo necesario sin legitimidad”. El totalitarismo es una forma autocrática todavía más radical y extrema, es duradera y absolutista

Libertad: Es la capacidad del ser racional y consciente de auto determinarse, ante la multiplicidad de alternativas de opción que se le ofrecen, en cada situación concreta. En este sentido, es un dato inmediato de la conciencia y se identifica con el libre albedrío: todos experimentamos que podemos ser un principio absoluto de acción, actuando o dejando de actuar, actuando de esta o de aquella manera. Es una facultad exclusiva del ser racional, capaz de interiorizar el mundo bajo una gran variedad de aspectos.

Igualdad: La Igualdad es otra característica de la persona que proviene de la dignidad humana. Todos los hombres y mujeres del mundo son, por el simple hecho de ser personas, iguales.

Justicia: La libertad y la justicia van de la mano; se complementa una con la otra. Si la justicia es la virtud de darle a cada quien lo que le corresponde por derecho; entonces, es necesario que se ejercite la libertad con justicia. El Estado tiene que otorgarle a cada persona lo que por derecho le corresponde a cada una de ellas.



Deber entendemos todo aquello a que está obligado el hombre por la moral, religión o el derecho. Estas obligaciones adquieren el carácter de exigencias o prohibiciones para la realización o no de algo, velando siempre por el desarrollo social.

Derecho entendemos la facultad de hacer o exigir lo que la ley o la autoridad establecen. Aplicado esto al desenvolvimiento social, el derecho es el conjunto de principios y preceptos que regulan las relaciones humanas en toda sociedad. Democracia La democracia en una forma racional de convivencia entre las personas, y su objetivo final es el mejoramiento del individuo y de la sociedad. Por tal razón, a ella se asocian una serie de valores: libertad, igualdad y justicia.

Ciudadanía: Se entiende por ciudadanía al estatus jurídico y político mediante el cual los habitantes de un país adquieren derechos como individuos (civiles, políticos, sociales), así como ciertos deberes respecto a una colectividad política, además de la facultad de actuar en la vida colectiva de un Estado.

Qué es la Sociedad Civil: La Sociedad Civil surge desde el momento en que los integrantes de una comunidad son capaces de coordinar por intermedio de un conjunto de asociaciones voluntarias e independientes del Estado.

El Pueblo. - El pueblo está conformado por el conjunto de personas que pertenecen a dicho Estado. En el caso del Perú, el pueblo está conformado por todos los que tienen la nacionalidad peruana. Esta nacionalidad se obtiene de tres formas principales. La primera es la condición de peruano por nacimiento, que corresponde a todos los que nacen en territorio nacional. La segunda es la adquisición de la nacionalidad peruana por naturalización que es la que corresponde a un extranjero que pide y obtiene la nacionalidad peruana (no es obligatorio para el Estado peruano acceder a su pedido). La tercera es la adquisición de la nacionalidad peruana por matrimonio: se trata de un



extranjero que contrae matrimonio con peruana, o de una extranjera con peruano. Cumpliendo ciertos requisitos, ese extranjero tiene el derecho de ser reconocido como peruano.

El poder. - La sociedad se organiza políticamente bajo la forma de Estado, y eso significa que va a tener gobernantes que dicten leyes y otras normas legales, y que establecen, en general, la forma en que se va conducir la vida social, respetando, por supuesto, la libertad y los demás derechos de las personas. Esta atribución de los gobernantes es precisamente el poder político.

El neoliberalismo en el Perú: Aquel pensamiento que postula un Estado minúsculo, donde absolutamente todo está guiado por el funcionamiento del libre mercado. Algo absolutamente ajeno al sistema económico que rige en el Perú.

Sistema neoliberalismo: Entonces se definió el concepto de neoliberalismo como «la prioridad del sistema de precios, el libre emprendimiento, la libre empresa y un Estado fuerte e imparcial». Para ser neoliberal es necesario requerir una política económica moderna con la intervención del Estado.



CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. UBICACIÓN DEL ESTUDIO

El presente estudio se realizó en la ciudad de Puno, Distrito, Provincia y Región de Puno. se encuentra ubicado a una altura de 3,832 m.s.n.m., y alberga una población de 125,663 pobladores aproximadamente (INEI, Censo 2007, Población y Vivienda), de los cuales 120,229 pobladores se encuentran en la zona urbana y 5,434 pobladores en la zona rural, caracterizándose por ser un eje comercial, administrativo y cultural, de articulación regional y extra regional.

3.2. PERIODO DE DURACIÓN

El presente estudio se realizó durante el año académico 2019 primer ciclo académico con una duración de seis meses pasando por 3 etapas: presentación del trabajo de investigación, ejecución y redacción de los resultados de investigación

3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO

3.3.1. Tipo y técnica de investigación

Análisis de Documentos, registros y materiales. Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o delinean sus historias y estatus actuales. Le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano. Veamos el uso de los principales documentos, registros, materiales y artefactos como datos cualitativos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 433).



Según Tamayo (1998) la investigación de biblioteca, consiste en la exploración de lo siguiente: Minutas de las reuniones, revistas, reportes de programas, software, políticas y planes curriculares, fotografías, planes que escriben maestros y maestras como guía para las lecciones, discursos públicos, reportes gubernamentales, estudios de alfabetismo publicados, registros administrativos (por ejemplo, tarjetas de reporte, registros de asistencia), libros, capítulos, artículos académicos, ensayos de posición, notas, manuscritos, tesis, etc., que son académicos e inéditos (a menudo disponibles a través del internet), cartas, revistas y diarios.

Investigación de biblioteca. Es una opción eficaz en términos de costos y responsabilidades a tomar en áreas donde ya existen investigaciones abundantes y donde podrían satisfacerse igualmente bien las necesidades de nuestra investigación (si no es que de mejor manera) recurriendo a la investigación existente en lugar de generar nuevos datos. La investigación de biblioteca se refiere a la investigación que emplea textos existentes como “evidencia documental” y el contenido de los textos existentes como su base de datos principal. Por supuesto, no se refiere sólo a la investigación literalmente conducida en biblioteca. Estamos hablando de situaciones en las que ya existen en forma de textos los datos que recolectamos, organizamos y analizamos a fin de abordar una pregunta de investigación bien definida, así como la información empleada como evidencia para las opiniones o ideas que estamos defendiendo. Estos textos podrían ser obras publicadas, o artefactos textuales existentes en colecciones y archivos, etc. (Knobel & Lankshear, 2002, pág. 63).

Los textos empleados por los investigadores de biblioteca son de muchas clases. Incluyen obras teóricas, explicaciones de conceptos, comentarios, ensayos de posición, textos exegéticos, documentos de políticas, documentos de planes de estudio, archivos



históricos, bases de datos disponibles, archivos periodísticos, estudios de investigación de laboratorio y de campo previamente publicados, correspondencia, y demás.

Para Knobel & Lankshear (2002) afirma que el diseño de los estudios de investigación de biblioteca depende en gran medida del propósito del estudio. En el caso de comentarios y críticas se caracteriza por investigar ensayos, artículos, capítulos, libros, etc., que sólo utilizan textos (en lugar de realizar investigación de laboratorio o de campo) para defender una perspectiva particular, discutir temas o problemas actuales, comentar sobre un aspecto o analizar ciertos textos a fin de explorar algún fenómeno.

b) Análisis de documentos. La primera tarea de un investigador es conocer la documentación sobre el problema que está desarrollando; por ello una fase fundamental en toda Investigación es el análisis de los documentos referentes al tema estudiado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los documentos son muy variados, teniendo que recurrir a todos aquellos que demande nuestro problema, sin más limitaciones que su pertinencia y su posibilidad de acceso (López, 2002, págs. 167-179).

3.3.2. Método de investigación

Es “la investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad.” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 364).



3.3.3. Diseño de investigación

Histórico, nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis (Tamayo, 1998, pág. 42).

Tamayo (1998), afirma las siguientes características de la investigación histórica:

A) Este tipo de investigación depende de datos observados por otros, más que por el investigador mismo. B) Estos datos son de dos clases: fuentes primarias, derivadas de la observación y registro directo de acontecimientos por su autor; fuentes secundarias, cuyo autor informa observaciones realizadas primeramente por otros. Las fuentes primarias son evidencias de primera mano y deben usarse preferentemente. C) Las fuentes deben someterse a dos tipos de crítica: crítica externa, que determina la autenticidad del documento; y la crítica interna, que examina los posibles motivos, prejuicios y limitaciones del autor del documento que posiblemente lo hayan determinado a exagerar, distorsionar u omitir información.

3.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO

Los actores materia de estudio, fueron autoridades dirigenciales en la época se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad.

3.5. PROCEDIMIENTO

Se ejecutó la selección de los actores directos e indirectos para su tratamiento metodológico. Siguiendo el método de Sandoval y Carvallo

(2017) la recolección se llevó a cabo a través de pares simétricos para garantizar que los participantes cumplieran el requisito de ser autoridades o dirigentes de las ya mencionadas organizaciones. En tanto, los grupos de discusión proveyeron la apertura tomando en cuenta la realidad de los actores para de esa manera dialogar sobre las percepciones y reminiscencias a cerca del discurso filosófico y las cargas dinámicas de la violencia política perpetuadas dentro del país. Asimismo, en ese punto se tiene que precisar que, las respuestas expresadas son de carácter voluntario, libre y consciente generados por los actores y no existe la manipulación por parte del que recolecta la información.

3.6. VARIABLES

Tabla 1
Unidad de investigación.

Unidad de investigación	Categorías	Sub categorías
La dictadura cívico militar del Gobierno de Alberto Fujimori 1990-1992	La violencia y el terrorismo 1990-1992.	- Violencia. - Elecciones 1990. - Captura de Abimael Guzmán Reynoso.
	El nuevo orden económico y el neoliberalismo 1990-1992.	- Neoliberalismo. - Economía liberal.
	El autogolpe y la dictadura cívico – militar 1990 -1992.	- Autogolpe. - dictadura.



3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Las entrevistas en profundidad y los grupos de discusión fueron sometidos a un riguroso tratamiento de la información bajo un paradigma humanista e histórico. Porque lo que interesa al estudio es, la diferencia entre las interpretaciones globales subjetivas del discurso que pueden explicarse fácilmente en una teoría cognitiva de la formación de macroestructuras.

Si bien para esta interacción comunicativa/persuasiva se emplea un cuidado especial en la estructura del texto (del discurso), también se tienen en cuenta los demás aspectos del proceso general, por ejemplo, unas fases determinadas para “encontrar” la temática correcta (inventio), la selección y el orden de determinados objetos dentro de la temática (dispositio), la estructura (estilo, etc.) de la actuación en sí (elocutio) y la manera en que se expone (pronuntiatio), así como las estrategias y estructuras cognitivas de la memoria (al hablar de memoria) (Van Dijk, 1992). En esa medida, se ha supuesto que las ideologías son principalmente expresadas y adquiridas a través del discurso o por interacción comunicativa hablada-escrita. Cuando los miembros de un grupo explican, motivan o legitiman sus acciones (grupales), lo hacen típicamente en términos de discurso ideológico (Van Dijk, 2005). Discursos que tenían intenciones de legitimarse a la fuerza por sus operadores políticos del odio.



CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS

4.1.1. La dictadura cívico militar del gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1992

La violencia política se escapó de las manos del régimen democrático y de los partidos políticos. Adquirió crecientemente una dinámica propia, fuera de los cauces de las instituciones democráticas. Los partidos políticos dependían cada vez más de las Fuerzas Armadas. Salvo los que intentaran crear su propia fuerza armada. El fin del monopolio de la violencia abrió una nueva etapa en la vida del país, sobre todo por la dimensión que adquirió (Pedraglio, 2014, pág. 38).

Afirma Pedraglio, (2014) esta coyuntura, condicionada por la crisis económica, por el empobrecimiento generalizado de la población, por el malestar social incesante, por el lamentable desempeño de los partidos políticos, intentó ser aprovechada, sobre todo, por quienes querían un cambio revolucionario de carácter totalitario y por quienes, por el contrario, aspiraban a desplegar una acción conservadora de gran envergadura. Fueron estas las dos fuerzas que tuvieron la iniciativa política en sus manos.

La instalación del orden como el eje de la agenda política, y como condición para imponer el proyecto neoliberal, no hace sino expresar la situación de excepcionalidad que se vivió en el Perú durante esos años, que fue aprovechada para la consolidación de un político aventurero hábil y autoritario como Alberto Fujimori y por los promotores del modelo económico que se venía imponiendo en casi todos los países de la región.

La incertidumbre había ganado un gran espacio en el ánimo de la población. El dato a resaltar, en este caso, es que este estado de ánimo de malestar y de ansiedad, como producto del incremento del desempleo y el empleo precario, como también de las



quiebras de empresarios, no pudo ser aprovechado ni canalizado por las fuerzas políticas populares. Sin embargo, este proceso de desencuentro fue gradual, no es que la población aprista o izquierdista abandonó de un día al otro a sus dirigentes. Incluso, en las elecciones de 1990, a pesar de todo lo vivido durante la década, en particular durante los últimos cinco años, el APRA logró obtener en las elecciones presidenciales un importante 20% de la votación y los dos candidatos de la izquierda dividida, algo más del 13%. No obstante, más importante que esa reducción del voto y de los porcentajes electorales que sufrieron el APRA y la Izquierda Unidad debe decirse que estas agrupaciones políticas habían dado muestras reiteradas de incapacidad para poner orden en el país (de manera democrática vía un proyecto reformista o revolucionario) y que no tenían una propuesta política sólida para enfrentar con éxito el futuro inmediato (Pedraglio, 2014, pág. 39).

La segunda vuelta electoral que permitió el triunfo de Alberto Fujimori (Cambio 90) sobre Mario Vargas Llosa (FREDEMO), fue el “canto del cisne” de las fuerzas reformistas que derrotadas y/o divididas aspiraban confusamente a mantener la democracia precaria, a administrar la crisis económica y a derrotar a Sendero Luminoso en el marco del inestable y sumamente recortado, pero aún vigente, del Estado de derecho.

No se puede, por supuesto, afirmar que el destino de esta situación era claro, o estaba inexorablemente definido, para los actores políticos enfrascados en la lucha por el poder durante esos años. Todo lo contrario. Más aún, se puede afirmar sin temor a equivocarse que las fuerzas reformistas de izquierda o del APRA, consideraban implícitamente que era manejable la situación sin llegar a los extremos de buscar salidas vía el “shock”, como proponía la derecha, o el golpe militar que propugnaba soterradamente un sector castrense, y, menos aún, mediante el proyecto de cambio radical totalitario de Sendero Luminoso.



El surgimiento de un “independiente” como Alberto Fujimori expresó la crisis de representación de los llamados partidos tradicionales que habían prevalecido durante la década de 1980, después de que se reinstalara la democracia, con el gobierno de Fernando Belaúnde. Pero el surgimiento de los independientes era también la expresión de la derrota de los partidos, una derrota que se manifestó en la desaparición o disminución radical de su representatividad, pero también de su credibilidad. Los partidos fueron “licuados”, en un lapso breve, por la crisis económica y social que vivió el país en la segunda mitad de la década de 1980. Esta derrota no se hizo inmediatamente evidente con los resultados electorales de 1990. Sin embargo, la forma como un aventurero, como Alberto Fujimori, convocó a los poderes fácticos, creó nuevas lealtades y sobre todo terminó de destruir el Estado (del que formaban parte los partidos políticos) y las bases productivas vigentes, fue radical, contundente y sobre todo exitosa.

El primer gran aviso de lo que estaba pensando y sintiendo la mayoría de la población se dio cuando, contra todo supuesto, las drásticas medidas aprobadas y aplicadas por el primer gabinete de Alberto Fujimori, en agosto de 1990, recibieron el apoyo mayoritario de los peruanos. Fue una manifestación de cuán escasamente los partidos políticos, incluyendo los integrantes de la Izquierda Unida, estaban sintonizados con la población, incluyendo y en especial a los pobres del país.

La coyuntura electoral que se vivió durante los comicios de 1990, en particular las semanas comprendidas entre la primera y la segunda vuelta, permite afirmar que el triunfo del entonces desconocido Alberto Fujimori sobre Mario Vargas Llosa constituyó la última gran resistencia de las fuerzas políticas y sociales que pretendían mantener las reglas económicas y políticas básicas (sobre todo las identitarias) instauradas durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y en parte de la década de 1980, en especial durante el gobierno de Alan García. O, también, fue el canto final de aquellas fuerzas que



pretendían impulsar cambios radicales revolucionarios desde el interior del sistema político, como fue el caso de sectores de la Izquierda Unida.

4.1.2. Elecciones 1990

Los resultados de la primera vuelta le dieron el triunfo a Vargas Llosa, pero la diferencia en relación con Fujimori era demasiado reducida como para asegurar su victoria en la segunda vuelta, pese a la gran maquinaria propagandística impulsada desde los medios a favor del Fredemo. Tras conocer los resultados, la primera y desesperada reacción de Vargas Llosa fue proponerle a Fujimori “actuar patrióticamente”, lo que se traducía en retirar su candidatura, para evitar una innecesaria segunda vuelta electoral. Como era previsible, el candidato de Cambio 90 declinó la invitación. Era evidente que con los votos del APRA y la izquierda, adversarios del Fredemo, el candidato Fujimori derrotaría fácilmente a Vargas Llosa (Pedraglio, 2014, pág. 44).

Según Degregori & Grompone, (1991) los resultados de la primera vuelta electoral del 8 de abril de 1990 en la que la votación obtenida por Mario Vargas Llosa supera por pocos puntos a la de Alberto Fujimori provocaron un sentimiento generalizado de sorpresa y desconcierto entre elites políticas, periodistas, consultores internacionales, expertos en el estudio del mercado político, sociólogos y politólogos. En suma, en quienes trataban de orientar o formar a la opinión pública y en aquellos que asumían estar en las mejores condiciones, por sus conocimientos e informaciones, para interpretar los cambios recientes en la sociedad y en la voluntad de los ciudadanos.

Durante la mayor parte de la campaña los esfuerzos del FREDEMO se centraron en superar el 50% de los votos necesarios según la ley electoral peruana para alcanzar la presidencia sin necesidad de ir a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, y para contar con mayoría propia en el Congreso. Sin embargo, hacia la tercera semana



de marzo, del grupo de cinco candidatos chicos, que no sobrepasaban en 1 o 2% en las encuestas, comenzó a destacar Alberto Fujimori, que en pocos días alcanzó el 10% de intención de voto en Lima. Lo que la prensa denominó tsunami, había comenzado. En las dos semanas siguientes su despunte se extendió a todo el país. El 8 de abril la gran sorpresa: Vargas Llosa alcanzaba apenas el 27.6% de votos, mientras Fujimori conquistaba el segundo lugar pisándole los talones con el 24.6% (Degregori & Grompone, 1991, pág. 13).

Los resultados alteraron sustantivamente el mapa político peruano. La izquierda descendió del 26% obtenido en 1985, al 11 %: 7% de IV y 4% de IS, que postulaba a Alfonso Barrantes, alcalde de Lima en el período 1984-1986, quien hasta entonces había mostrado una singular capacidad de vincularse con el electorado popular y al principio de la campaña aparecía como el más serio competidor de MVLI. El APRA descendía del 48% obtenido en 1985 a un 19%, que demostraba a pesar de todo la capacidad de convocatoria del partido que había llevado al país a la inflación y la recesión más graves de su historia. La derecha vio naufragar sus esperanzas de una victoria arrolladora, ubicándose apenas 8.6% por encima del magro 19% que alcanzaron AP y PPC sumados en

Tabla 2
Elecciones presidenciales 1990: primera vuelta, resultado nacional

CANDIDATOS	LISTAS	ABSOLUTOS	%
Mario Vargas Llosa	Fredemo	2.163.323	33
Alberto Fujimori	C90	1.932.208	29
Luis Alva Castro	APRA	1.494.231	22
Henry Pease	IU	544.889	8
Alfonso Barrantes	IS	315.038	5
Roger Cáceres	FNTC	86.418	2
Ezequiel Ataucusi	Frepap	73.974	1
<i>Votos válidos</i>		<i>6.641.584</i>	<i>85</i>
<i>Votos nulos</i>		<i>569.537</i>	<i>7</i>
<i>Votos blancos</i>		<i>625.995</i>	<i>8</i>
<i>Votos emitidos</i>		<i>7.837.116</i>	<i>78</i>
<i>Ausentismo</i>		<i>2.176.109</i>	<i>22</i>
<i>Total de inscritos</i>		<i>10.013.225</i>	<i>100</i>

Fuente: Tuesta Soldevilla, Fernando (2001): Perú político en cifras. 1821-2001. Lima: Friedrich Ebert Stiftung.

En la segunda vuelta la propuesta de *shock* de Vargas Llosa se convirtió en eje del debate político y de las alianzas electorales. El peligro de Sendero se trasladó, momentáneamente, a un segundo plano, y algo semejante ocurrió con la crisis económica que el país heredaba del gobierno de García.

Gana la alianza APRA-Fujimori y fracasa la desesperada estrategia de la derecha política, económica y eclesial. El esfuerzo del Fredemo por centrar la atención en la crisis económica que el APRA había causado con su política heterodoxa fracasó. No logró captar suficientemente la atención ni despertó la preocupación de la mayoría de los electores. La identificación de Varga Llosa con la derecha y con los ricos tuvo un efecto superior a la hiperinflación.

La arrolladora victoria del Ing. Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales celebradas en el Perú el 10 de junio de 1990, constituyó la mayor sorpresa en los anales de la historia electoral del país. Fujimori era candidato del movimiento independiente



Cambio 90, que agrupaba a pequeños industriales, comerciantes y microempresarios "informales", profesionales y pastores evangélicos. A la cabeza de tan sorprendente y heterogéneo conglomerado, ese ingeniero agrónomo, hijo de japoneses, con dificultades para expresarse correctamente en castellano, derrotó por más de 20% de diferencia a la mayor gloria viva de las letras peruanas, Mario Vargas Llosa, candidato del Frente Democrático (FREDEMO), quien se consideraba seguro ganador hasta la inesperada irrupción de Fujimori (Degregori & Grompone, 1991, pág. 11).

Afirma Degregori & Grompone, (1991) en efecto, a pesar de la hiperinflación que agobiaba el país, hasta fines de marzo la campaña electoral se desarrollaba sin sobresaltos. Con alrededor del 40% de intención de voto en las encuestas, la derecha unida en el FREDEMO parecía no tener rivales. El APRA, partido de gobierno, se hallaba desgastado por la crisis económica y el personalismo exacerbado del presidente García. La izquierda, segunda fuerza electoral en 1985, se presentaba dividida en dos candidaturas: Izquierda Unida (IU) e Izquierda Socialista (IS), que no lograban despertar el entusiasmo de los electores. El FREDEMO parecía tenerlo todo: la unidad; un programa neoliberal coherente, elaborado por un calificado equipo de técnicos; el asesoramiento de Sawyers & Miller, una de las empresas de marketing político más importantes del mundo; un candidato "de lujo" y el apoyo de los principales grupos de poder económico, que poblaron sus listas parlamentarias de dirigentes de la poderosa Confederación de Instituciones Empresariales del Perú (CONFIEP).

4.1.3. La violencia y el terrorismo en el gobierno de Alberto Fujimori 1990-1992

En el análisis de documentos, comunicados y trabajos de diferentes organismos internacionales e investigadores del tema se encuentra una falta de homogeneidad para definir a los grupos terroristas y se utiliza indistintamente como equivalentes "grupos alzados en armas", "rebeldes combatientes", "insurgentes", "grupos políticos",



“militares”, “guerrilleros”, “grupo irregular”, entre otros, como sinónimos para denominar a los terroristas (Tramontana, 2019, pág. 4).

Afirma Tramontana, (2019) terrorismo son actos de violencia armada contra la vida, la salud y la libertad de las personas ejecutadas de un modo sistemático y planificado que tienden a crear una situación de inseguridad y de peligro colectivo para alterar el orden constitucional o la organización jurídica del sistema democrático. Terrorismo es sólo en apariencia una forma de lucha política. Pero puede ser el modo de expresar complejos psicológicos personales, frustraciones y resentimientos que tienen un origen social. El terrorista da forma a este sentimiento, lo convierte en razón y lo conserva como motor que lo guía en la acción. El resentimiento y la protesta reprimidos largamente se convierten en ideología. Luego se mata o se muere por dicha ideología, pero en realidad se está matando por un trauma personal.

El terrorismo puede ser motivado por diversos factores cuando está en relación con la variable política. El terrorismo político es la utilización sistemática y organizada de la violencia criminal con el propósito de incrementar el poder de un grupo para alcanzar un objetivo político.

Para lograr comprender mejor el orden conceptual es necesario hacer una pequeña reseña, según los glosarios de términos que utilizan la mayor parte de ONGs y academias dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos:

- **Violencia política:** se define como el contexto social en el que se desarrolla el conflicto entre por lo menos dos grupos organizados, uno de los cuales es el Estado.
- **Delito político:** se define considerando que la intencionalidad del acto sea político, es decir, que las acciones que realizan personas o grupos no-estatales tengan por fin



la destrucción del sistema político y social imperante, con la intención de reemplazarlo por otro distinto.

- Violaciones a los Derechos Humanos: resultan de la aplicación de medidas represivas por parte de los agentes del orden o por parte de los agentes estatales que actúan bajo el amparo de los agentes oficiales. En cambio cuando las transgresiones provienen de entes no-estatales se califican de abusos contra los Derechos Humanos.
- Criminalidad subversiva: ejecución de un plan político específico en manos de “grupos alzados en armas” que en la ejecución de un plan político específico practican actos contrarios a la vida o la libertad de las personas, así como la destrucción de bienes públicos o privados. Dentro de estas “acciones” se pueden perfilar las de carácter terrorista útiles a los objetivos políticos.
- Calificación de “Sendero Luminoso”: se encuentra un manejo poco preciso y equívoco para referirse a los grupos terroristas que operan en el Perú. Lo que se condena fundamentalmente son las acciones o actos de tipo terroristas que constituyen violaciones de los Derechos Humanos.

En el Perú, el terrorismo no sólo está tipificado como delito de traición a la patria, sino que además dichos actos constituyen violaciones contra los Derechos Humanos a la mayor parte de los peruanos. Las transgresiones a los Derechos Humanos perpetrados por los terroristas también transgreden los límites nacionales infiltrándose en otros Estados, desprestigiando la imagen externa del país. En base a lo anterior se puede ensayar una definición sobre lo que es “Sendero Luminoso”: una organización terrorista que ha realizado actos de violencia armada contra la vida, la salud, el patrimonio y la libertad de las personas de un modo sistemático y planificado tendientes a crear una situación de



inseguridad y de peligro colectivo para alterar el orden constitucional o la organización jurídica del sistema democrático; para la toma del poder político y desde allí aplicar sus doctrinas económicas sociales y educativas. En suma, para modificar la forma de vida de la población y de las relaciones entre los distintos actores del quehacer nacional.

En este sentido, según la Doctora Beatriz Ramacciotti, “Sendero Luminoso” es calificado como grupo terrorista, cuyas acciones criminales no pueden convalidarse como “delitos políticos conexos con comunes” sino como crímenes de lesa humanidad sujetos a la legislación penal interna y condenados por el Derecho Internacional.

Abimael Guzmán fue un líder carismático, de notable influencia entre los estudiantes y propulsor de la estrategia de aplicar el máximo de crueldad para alcanzar los fines revolucionarios. La influencia fundamental en Sendero Luminoso fue la Revolución Cultural “por la que Mao pretendió poner fin a las viejas costumbres, los viejos hábitos, la vieja cultura y los viejos modos de pensar” y la estrategia militar de Mao Tse Tung. Si bien Sendero mostró creatividad al combinar la rigidez estratégica con la flexibilidad táctica y la lucha en el campo y en la ciudad, en gran parte la llamada “línea militar del Presidente Gonzalo” no era más que una imitación de los planteamientos de Mao Tse Tung (Tramontana, 2019, pág. 9).

Cuando Sendero Luminoso inició su lucha armada en 1980, no solo sorprendió a todos los sectores políticos y al gobierno, sino que también encontró desprevenidas a las Fuerzas Armadas. Sendero Luminoso logró expandirse debido a la crítica situación por la que pasaba el país y a cómo la población percibía la miseria, el atraso, la exclusión y la injusticia. Y por otro lado estaba el contexto político, la ideologización, la voluntad de los insurgentes y el comportamiento de los actores sociales, políticos y militares.



Durante 1989, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas elaboraban y ponían en funcionamiento la nueva estrategia contrasubversiva, un grupo de militares y civiles preparó clandestinamente un plan de golpe de Estado para introducir un sistema de «democracia dirigida» a partir del cambio de gobierno en julio de 1990. La línea política neoliberal y autoritaria de este extenso documento, conocido en medios periodísticos como el «Plan Verde», fue asumida después por la camarilla político-militar que Vladimiro Montesinos organizó alrededor de Fujimori. En adelante, llamaremos Plan Político-Militar a este documento, a falta de otro nombre más preciso. La idea del Plan Político-Militar era hacer un pronunciamiento militar poco antes del cambio de gobierno, derrocar en el acto a Alan García, detenerlo, procesarlo por traición a la Patria y presionar al nuevo Presidente para que aceptara cogobernar con las Fuerzas Armadas. Esta acción no se puso en marcha porque el ascenso de Fujimori complicó las cosas (PUCP, 2009, pág. 156).

El Plan Político-Militar contaba con una polarización extrema entre el Frente Democrático (Fredemo) y el PAP que impediría una salida pacífica dentro del proceso democrático y daría lugar a un pronunciamiento militar del que nacería un nuevo régimen civil sustentado por las Fuerzas Armadas, el cual realizaría los dos grandes cambios inminentes e inevitables, la reforma económica y la derrota del terrorismo. Pero el acercamiento político de Fujimori con el PAP y las izquierdas a inicios de su gobierno abrió un compás de espera. Éste se alargó a causa de las negociaciones con los Estados Unidos sobre la ayuda militar y económica para luchar contra la subversión y el narcotráfico. En todo este proceso, Vladimiro Montesinos, aunque no había formado parte del grupo creador del Plan Político-Militar, se hizo cargo de mantener vivo el plan a través de estas complicaciones, actualizándolo y adecuándolo a los intereses de su camarilla presidencial-militar. En otras palabras, llevó la conspiración más allá de lo que se habían



imaginado los conspiradores. Finalmente, el operativo previsto en el Plan Político-Militar y su programa de gobierno, actualizados para la nueva coyuntura, fueron puestos en práctica en el golpe de Estado de Fujimori el 5 de abril de 1992.

El objetivo principal del Plan Político-Militar es establecer un gobierno militar secreto que sea el que efectivamente gobierne mientras se mantiene la apariencia de que los responsables políticos son los ministros del gobierno elegido. El poder real y determinante se encontraría en el ámbito de acción llamado «dominio estratégico» y sería ejercido por el Jefe de Estado, la Junta de Gobierno, el Consejo Estratégico del Estado (CEE) y la Secretaría Ejecutiva Nacional (SEN). Según el plan, este nivel superior de acción del Estado no debe estar expuesto al desgaste político ni debe estar dentro del campo visual del enemigo, por ello «su existencia debe ser un secreto». El Jefe de Gobierno y demás «encargados de los portafolios», en cambio, «podrán sufrir el desgaste que fuera preciso y ser removidos o reemplazados sin que la conducción estratégica de la Patria sufra alteración alguna». Ellos actúan en el «dominio político», el cual «cumple la función de camuflaje» y es responsabilizado de los defectos y errores de la gestión real. Una metáfora ayuda a explicar de qué se trata: «quien decide por dónde debe ir el vehículo (Estado) para llegar a los objetivos nacionales de largo plazo es las Fuerzas Armadas que emplea los mejores choferes (Civiles) para manejar dicho vehículo» (PUCP, 2009, pág. 157).

La diferencia entre el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno no da lugar aquí a un primer ministro fuerte y un auténtico gobierno de gabinete, como es lo propio de las democracias constitucionales europeas. Los ministros obedecen a un gabinete secreto, el Consejo Estratégico del Estado, el cual ejecuta sus decisiones mediante la Secretaría Ejecutiva Nacional. Ésta es el «núcleo operativo principal, es el vaso comunicante y el



motor de los nuevos destinos de la Patria, es el ESTADO MAYOR, el celoso guardián de la aplicación de acciones destinadas a resolver los problemas estratégicos del Estado».

En la composición del Consejo Estratégico del Estado llama la atención que no figure el Jefe de Estado (el Presidente de la República elegido) y en cambio sí el Jefe de Gobierno (que viene a ser el Presidente del Consejo de Ministros). Los demás miembros son la Junta de Gobierno (presumiblemente los tres Comandantes Generales), el Jefe de la Guerra Contrasubversiva (presumiblemente el Presidente del Comando Conjunto), el Jefe del Sistema Nacional de Control, Seguridad y Propaganda (una especie de GESTAPO), el Secretario Ejecutivo Nacional (Jefe de la SEN), cinco miembros designados por la SEN y «el Presidente del Directorio Estratégico cuyo sector esté en análisis y discusión». Hay tantos Directorios Estratégicos como ministerios.

Con el incremento progresivo de la violencia o el terrorismo, al tiempo que la crisis económica se volvía inmanejable, las FFAA empezaron también a preocuparse por el futuro y gobernabilidad del país. Una vez que Fujimori, elegido presidente, acepta algunas ideas básicas del Plan Político-Militar a través de la mediación de Montesinos, se iniciará un período de incremento del poderío militar sin control democrático en el país. Uno de los puntos de negociación o entendimiento básico con las FFAA que Fujimori acepta es la continuación de la estrategia contrasubversiva en curso y dirigida exclusivamente desde las FFAA, asegurando amplios márgenes de discrecionalidad sin control o fiscalización de sus acciones, propiciando la impunidad para violaciones de derechos humanos contempladas en la misma.

Las decisiones de los dos grandes actores del conflicto y la elección del nuevo gobierno obligarán a los otros actores a tomar decisiones. Por un lado, la Policía Nacional del Perú (PNP), subordinada a los Comando Político Militares en las zonas de



emergencia, cumplirá las funciones asignadas a partir de la nueva estrategia. Particularmente en el Frente Mantaro, los policías tendrán una participación decisiva en el proceso de desaparición forzada de cientos de personas, destacando por ejemplo el rol asumido desde la Oficina Regional de Inteligencia (ORI). De otro lado, en marzo de 1990, mientras las elecciones generales estaban en su máximo punto de confrontación, se formó el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) en la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE). Mientras que los grupos operativos «Delta» de la DIRCOTE continuaban abocados a la tarea legal de investigación de atentados y acciones terroristas en Lima, el GEIN se dedicó a trabajar exclusivamente en el desarrollo de operaciones encubiertas de inteligencia (seguimientos y vigilancia) para la captura de los principales líderes subversivos. Antes del cambio de gobierno, el 1 de junio, dio su primer y gran golpe al allanar una casa donde hasta pocos días antes se alojaba Guzmán y donde encontraron información valiosa. Después de esta operación, el PCP-SL se abre como una «caja de Pandora»; la intervención fue «el principio del fin de Sendero Luminoso».

En enero de 1990, durante el proceso electoral realizó, en revancha, uno de sus actos más osados al asesinar al ex Ministro de Defensa Enrique López Albújar. Asimismo, el 9 de julio, a pocos días del cambio de gobierno, el MRTA logra burlar al gobierno y hace que 47 emerretistas reclusos en el penal de alta seguridad de Miguel Castro Castro fugaran, incluyendo a Víctor Polay Campos y Alberto Gálvez Olaechea, dos de sus principales líderes. Una vez libres, a partir de su evaluación del peculiar proceso electoral y la situación del país, dudarán y apostarán por la posibilidad de entrar en negociaciones con el nuevo gobierno para dar por concluida su participación en el conflicto. Para ello, el mes de septiembre secuestraron al diputado oficialista Gerardo López y calificaron el hecho como una «invitación para conversar». A pesar de haber difundido públicamente



durante la campaña la posibilidad de dialogar con los subversivos, el presidente Fujimori se negará a ello. Pronto, el MRTA arremetería nuevamente.

1990 no fue solamente un año que recibió una ola de violencia creciente como producto del conflicto armado interno. Casi tan o más importante que la violencia, la crisis económica había llegado a tal punto que realmente amenazaba la subsistencia de miles de peruanos. El problema de la inflación y los sucesivos paquetazos, sufrido desde 1988, parecía incontrolable. La población demandaba una solución urgente a estos problemas vitales y pronto aceptaría que estos se resuelvan casi a cualquier costo. La conjunción alarmante de violencia exacerbada e inflación rampante configuraron un escenario nacional, con variantes regionales, de crisis extrema y tiempo social acelerado, que se prolongaría hasta 1992.

a) Captura de Abimael Guzmán Reynoso

El maoísmo logró gran arraigo en el Perú, mayor que en otros países latinoamericanos; de él surgieron varias fracciones que encontraron una respuesta significativa entre la población. Sendero Luminoso fue una más de las varias corrientes maoístas en Perú y hasta 1980 era de las menos importantes. Del viejo tronco del Partido Comunista surgieron Bandera Roja y Patria Roja, además de Sendero Luminoso; otros grupos maoístas fueron Vanguardia Revolucionaria y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, menos dogmáticos que los anteriores, pero todos promotores de la vía armada. Abimael Guzmán Reynoso, nacido en Arequipa en 1934, estudió Filosofía y Derecho, inició su militancia política en el PCP en 1960. En ese mismo año, como consecuencia de una reforma académica perdió su puesto de profesor en la Universidad de San Agustín en la ciudad de Arequipa y se incorporó como profesor de Filosofía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga en la ciudad de Ayacucho, reabierta en 1957 (Escárzaga, 2001, pág. 81).



La fracción maoísta del PCP que se convertiría en Sendero Luminoso, apareció en 1961 con la creación del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) de Ayacucho, que encontró condiciones favorables para desarrollarse durante el rectorado de Efraín Morote Best (1962-1968) un antropólogo progresista. En 1963 Abimael Guzmán se incorporó al Consejo Ejecutivo de la Universidad como funcionario y paralelamente continuó su actividad partidaria en la “célula funcional” de intelectuales del PCP, realizando una intensa actividad política en los barrios pobres de la ciudad. Más tarde, asumió la dirección del trabajo juvenil del partido y comenzó a utilizar la Universidad para reclutar, educar, organizar y subsidiar el crecimiento de cuadros comunistas.

El proceso de entronización de Abimael Guzmán iniciado en 1980 culmina en 1987 en que se bautiza a la doctrina senderista elaborada por él como Pensamiento Gonzalo, aplicación de la ideología del proletariado universal, el marxismo-leninismo-maoísmo, a las condiciones particulares del Perú y a su autor como Presidente Gonzalo. Guzmán era el dirigente indiscutido, el cerebro organizador de la guerra y la revolución, concentraba todo el poder en sus manos, era la garantía de la continuidad del proyecto revolucionario y de la fidelidad a sus fines, más allá de la toma del poder. Ningún dirigente guerrillero latinoamericano vivo y sin haber alcanzado el triunfo había concentrado tanto poder y prestigio como él (Escárzaga, 2001, pág. 92).

Uno de los elementos más sorprendentes del fenómeno senderista es que, haciendo uso sistemático, indiscriminado y despiadado del terror, haya incrementado continuamente su base social, que el uso del terror le haya reportado durante mucho tiempo un gran prestigio entre sus adherentes y simpatizantes e incluso entre sus detractores y que le haya facilitado un rápido crecimiento hasta su consolidación como fuerza nacional beligerante.



Sendero no inventó el terror; sus promotores principales eran las fuerzas armadas, quienes lo aplicaban sin fiscalización por parte de las fuerzas políticas o de la sociedad; la violencia era un elemento constitutivo y cotidiano en las relaciones de una sociedad como la peruana étnicamente dividida, Sendero le dio un uso sistemático. Para hacer un uso eficaz del terror, Sendero convenció a sus cuadros de que el terror era algo no solamente necesario, sino también moralmente válido. Guzmán elaboró un discurso justificador del terror y del autosacrificio que fue asumido por sus militantes, pues resultaba congruente con su propia experiencia vital y sus frustraciones.

Afirma Escárzaga, (2001) en su discurso apocalíptico Guzmán amplió la brecha existente entre sus adherentes y sus enemigos. La separación étnica, social, política y geográfica de la sociedad peruana era un dato objetivo, pero Guzmán lo convirtió en un abismo, atizando el odio racial justificaba el uso de la violencia y facilitaba su expansión. Este elemento incrementó la eficacia combativa de los senderistas, pero al mismo tiempo impuso un límite rígido a su crecimiento; marcó fatalmente quiénes estaban incluidos en el proyecto y quiénes no; los que no compartían su marginación social y/o no aceptaban sus métodos violentos, quedaban fuera. El nuevo orden social proyectado por Guzmán a medida que avanzaba en su lucha, excluía a nuevos sectores populares, incrementando por decisión propia el número de sus enemigos potenciales.

Abimael Guzmán fue capturado el 12 de septiembre de 1992 en Lima, en una residencia del distrito de Surquillo, gracias a un operativo ejecutado por el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dirección nacional contra el Terrorismo (DIRCOTE) comandado por un general de la Policía Nacional peruana, el general Ketín Vidal, y sentenciado por un tribunal militar a cadena perpetua (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003).

4.1.4. El nuevo orden económico y el neoliberalismo en el gobierno de Alberto

Fujimori 1990-1992

El sustento teórico del neoliberalismo que proviene de la escuela clásica y neoclásica; en las dos últimas décadas del siglo XX, se presentaba como una teoría desvinculada de cualquier juicio de valor ético o filosófico. Lo hizo, basado en las tesis de Adam Smith, cuya doctrina establecía, que no era la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo; ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas sostenía Smith.

Los neoliberales culpan de los males de la economía a la intervención del estado. Sin embargo, muchas de las deficiencias, no pueden ser atribuidas a la intervención del estado, sino al funcionamiento de los mecanismos del propio mercado, lo que se ha denominado, como fallas del mercado.

La ideología neoliberal comenzó a gestarse en el Perú antes de 1990, tras la llegada al poder de Alberto Fujimori, el Neoliberalismo se consolidaría mediante la reconcentración del poder y los recursos de producción, el Perú sería sometido a un nuevo diseño de Estado (Butron , 2018, pág. 56). Además, Fujimori se pondría “en la línea del Consenso de Washington cuyo objetivo no era un simple ajuste, donde fuera necesario, sino el rumbo neoliberal, la destrucción de los modelos precedentes agotados, etc.” (Pease , 2003, pág. 192).

En 1990 marca el inicio de la implementación del modelo neoliberal en el Perú. Este proyecto ha sido llevado a cabo sin interrupciones desde entonces. En este punto, con respecto a las transformaciones del Estado y las políticas sociales en la era neoliberal, seguiremos algunos de sus principales procesos usando como hitos a los últimos



gobiernos. Consideramos que éstos presentan como continuidad este modelo de bienestar, pero como veremos, existen cambios de estilo, dirección y también problemas no esperados (Pereyra, 2018, pág. 20).

El ganador de las elecciones de 1990, confrontado por la alianza de empresarios, políticos, técnicos y grupos de las FF. AA terminaría de admitir el proyecto neoliberal. Para que esto último aconteciera, la asesoría brindada por organismos internacionales y la relación cercana entre Alberto Fujimori y el economista Hernando de Soto fue fundamental.

De Soto tuvo el buen tino de persuadir al ingeniero Fujimori de hacer un viaje a Estados Unidos como presidente electo, para entrevistarse con los representantes de los organismos financieros internacionales y mejorar su imagen y la del país frente a ellos. Le sugirió también que para hacer este diálogo fructífero se rodeara de técnicos y asesores de peso, capaces de sintonizar con las inquietudes y absolver las interrogantes de los voceros del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (Boloña , 1993, pág. 21).

“Durante sus primeros años, el régimen de Fujimori se embarcó en un proyecto político que implicó la reconstitución de la autoridad estatal y la reestructuración de la economía y las relaciones entre el estado y la sociedad, siguiendo los lineamientos básicos del modelo neoliberal” (Burt, 2009, pág. 262).

Tras regresar de sus viajes no sólo a EE. UU sino también a Japón, Fujimori se internó en el Pentagonito bajo la excusa de que su vida estaba en peligro, la realidad es que necesitaba ultimar detalles para poner en marcha el proyecto neoliberal, dándose inicio mediante este hecho al régimen denominado fujimorismo en alianza con las FF.AA. (Butron , 2018).



El gobierno de Fujimori daría inicio a la implementación del modelo neoliberal en el Perú. La secuencia de implementación de reformas recomendadas por los organismos multilaterales. Era objetivo del proyecto neoliberal del Consenso de Washington el desarrollar un libre mercado internacional entendiendo a la competencia de actores en el Mercado como motor del crecimiento económico y la reducción el tamaño del Estado a través la privatización de gran parte de las empresas públicas y servicios sociales. En líneas generales este plan fue llevado a cabo, aunque como veremos más adelante hubo factores no previstos dentro del proyecto neoliberal, como la vocación autoritaria y el proyecto re-eleccionista de Fujimori, los casos de corrupción a gran escala, y por supuesto, el crecimiento de la pobreza y desigualdad (Pereyra, 2018, pág. 20).

Con relación a esto, podemos señalar que en 1989 un grupo de militares habían elaborado lo que se bautizó como “Plan Verde”, o también llamado “Libro Verde” el cual contemplaba principalmente, pautas para terminar con la hiperinflación, recuperar la confianza de los organismos internacionales y obtener crédito de los mismos. Tras la llegada al poder de Fujimori, el citado documento tuvo que aguardar su aplicación, sin embargo, al darse cuenta los militares de que el gobierno del ex rector de la universidad agraria La Molina, se caracterizaba por la inseguridad política, inexistencia de un programa de gobierno formal y apropiado, un partido político sin ideología clara, entre otros, el manuscrito elaborado esencialmente por militares, pero con asesoría civil, se plasmaría con la ayuda y el respaldo del mismo presidente de la Republica. “El libro verde representaba la adaptación del pensamiento militar a la economía de libre mercado. Destacaba la necesidad de una reestructuración radical, incluyendo la venta de las industrias claves” (Obando, 2000, pág. 362).

El llamado fujishock recibió una condescendiente acogida de la población: “En agosto, a pocos días de haber asumido Fujimori el gobierno, fue aplicado un programa



radical de ajuste económico sin la menor previsión de programas sociales de emergencia para los más pobres. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales fueron desplegadas para prevenir desmanes y saqueos, pero ello fue casi innecesario, pues la población asumió pacíficamente los hechos sin actos de desobediencia. Al día siguiente del fujishock, cuando el dinero ya no alcanzaba para adquirir ni la décima parte de los bienes del día anterior, una encuesta estimó que el 49% de la población estaba de acuerdo con las medidas económicas” (Reátegui , 2009, pág. 164).

A dos meses de su posesión, el gobierno Fujimori impuso dos medidas que perfilaron lo que serían las políticas prioritarias del régimen en el transcurso de la década. El 7 de agosto de 1990 decretó el Estado de emergencia en Lima y nueve provincias del país por un lapso de 30 días, y un día después decretó un plan de ajuste que contemplaba la supresión de los subsidios a productos de primera necesidad como el pan, la leche, el azúcar, la pasta, y la gasolina (Honorio, 2009, pág. 67).

En agosto de 1990 el gobierno de Fujimori inició la aplicación del programa neoliberal del Consenso de Washington, en un contexto internacional favorable - contrario al de los 80, caracterizado por el retorno de los créditos externos, la reducción de las tasas de interés internacional, y el dominio ideológico del mercado libre y de la consecuente eliminación de la intervención económica del Estado. Dado que según este Consenso los recursos deben asignarse sólo a través del mercado, el Estado debe ser neutral, debe privatizar sus empresas y algunos servicios (seguridad social, educación, etc.), y debe redefinir su tamaño en función del principio de la austeridad y el equilibrio presupuestal. El propósito del programa neoliberal fue así sentar las bases de un nuevo patrón de crecimiento y acumulación (Jiménez, 2001, pág. 146).



El régimen neoliberal se inicia en 1990 con un empleo informal que representa el 52,0% del empleo total, y en lugar de reducirlo lo incrementó hasta alcanzar la cifra de 56,9% en 1997. Aún si del conjunto del empleo se sustrajera, los trabajadores que cumplen con las regulaciones o que trabajan en empresas con las que tienen vínculos que se adecuan a las regulaciones, el porcentaje de empleo informal (54,0%) durante los años de crecimiento 1993-1997 ni siquiera se situó por debajo del registrado entre 1986 y 1987(55,1%), dos años de crecimiento económico en la década de los '80. El modelo neoliberal no ha reducido por lo tanto los empleos de refugio, de mala calidad y precarios por ser inestables y carentes de beneficios sociales. Además pertenece a un sector con escasas o nulas posibilidades de modernización por sus bajas remuneraciones y productividades.

A principios de 1990, el país experimentaba la mayor y más prolongada inflación (4,778% a julio de 1990) y recesión en el curso de su historia; además enfrentaba altas tasas de desempleo, caída en los ingresos tributarios y persistencia del desequilibrio fiscal, distorsiones en los precios relativos y un creciente proceso de desintermediación financiera, retraso en los precios de servicios públicos y una reducción en los salarios reales (Vargas, 2006, pág. 63).

Con los ajustes y políticas neoliberales, la magnitud del aseguramiento en salud ha disminuido en las distintas modalidades de seguros públicos y privados. El porcentaje de personas con seguro de salud disminuyó de 37,7% en 1994 a 23,5% en 1997. La población con seguro privado, además de EsSalud, es la que sufrió la mayor disminución entre 1994 y 1997: a más de la mitad. EsSalud disminuyó en algo más de un tercio y los que sólo tenían seguro privado disminuyeron en casi un tercio (Petrera & Cordero, 1999, pág. 218).



4.1.5. El autogolpe y la dictadura cívico – militar en el gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1992

A pesar del extremismo económico impuesto por Alberto Fujimori, este sorprendió a todos, cuando la noche del domingo 5 de abril de 1992, dio a conocer que las reformas efectuadas en el terreno económico no estaban siendo suficientemente efectivas y que debido a esto se observaban resultados negativos en relación al incremento de los precios, la pobreza y el desempleo. El Poder Ejecutivo, con Fujimori a la cabeza, se negaba a asumir las consecuencias sociales negativas que había tenido el shock en tanto le echaba la culpa al Poder Legislativo por entorpecer la reforma y dejarlo literalmente con las manos atadas. Previo al golpe, y para reforzar su accionar, el mandatario había calificado al Congreso como el aposento de lobbies del narcotráfico. Además, le había mudado el nombre al Palacio de Justicia llamándolo ahora Palacio de la Injusticia (Butron , 2018, pág. 63).

Para ejecutar el Autogolpe, Fujimori había sido apoyado por mandos militares, alianza que se había encargado de plasmar Vladimiro Montesinos. Es indudable que el autogolpe consolidó la alianza entre el fujimorismo y los militares, aumentando significativamente la presencia de estos últimos en las decisiones del gobierno. Desde su llegada al poder Fujimori tenía en mente efectuar una acción de esta índole, con el objetivo de tener el control total de las principales instituciones del Estado.

La noche del 5 de abril se anunció el establecimiento de un Gobierno de Emergencia, el cual tendría entre sus objetivos, reemplazar la Constitución de 1979, moralizar radicalmente el Poder Judicial, modernizar la administración pública, y principalmente promover la economía de mercado dentro de un marco jurídico que de seguridad y fomenta la eficiencia y competitividad de los agentes económicos.



El autogolpe recibió un apoyo importante de la población: entre el 70 u 80% de los encuestados lo aprobaban. Estas medidas fueron apoyadas con la esperanza de una mejora en la calidad de vida y de una eficaz lucha antisubversiva, en que muchos percibían al Congreso, al Poder Judicial y a la oposición como obstruccionistas a las medidas dadas por el gobierno en áreas vitales como la estabilización de la economía y la guerra contra el terrorismo. La oposición política se opuso a estas pero su fuerza fue rala para movilizar a la población a excepción de sus simpatizantes y sus militantes (Villegas, 2011, pág. 2).

Tras el golpe, el Congreso de Republica fue cerrado indefinidamente y las oficinas del Poder Judicial por más de veinte días, se arrestaron a personajes importantes de la oposición, se sacaron de sus cargos a un sin número de autoridades, y lo más importante se comenzaba a cuestionar fuertemente la Constitución de 1979. A partir de entonces la palabra retenida en la mente de todos los peruanos seria “disolver” (Quiroz, 2013).

Sin embargo, es importante señalar que el Autogolpe impuesto por Fujimori no se llevó a cabo porque su gobierno estuviera impedido de continuar con las reformas que ya había empezado, sino más bien porque “el presidente empezaba a perder popularidad. Por ello levantó impedimentos y ataduras inexistentes y produjo un terremoto político que cambio el escenario y puso todo el poder en sus manos” (Pease & Romero , 2013, pág. 353).

A pesar del extremismo económico impuesto por Alberto Fujimori, este sorprendió a todos, cuando la noche del domingo 5 de abril de 1992, dio a conocer que las reformas efectuadas en el terreno económico no estaban siendo suficientemente efectivas y que debido a esto se observaban resultados negativos en relación al incremento de los precios, la pobreza y el desempleo. El Poder Ejecutivo, con Fujimori a la cabeza, se negaba a asumir las consecuencias sociales negativas que había tenido el shock en tanto le echaba



la culpa al Poder Legislativo por entorpecer la reforma y dejarlo literalmente con las manos atadas. Previo al golpe, y para reforzar su accionar, el mandatario había calificado al Congreso como el aposento de lobbies del narcotráfico. Además, le había mudado el nombre al Palacio de Justicia llamándolo ahora Palacio de la Injusticia.

Literalmente Fujimori expresaba que: El caos y la corrupción, la falta de identificación con los grandes intereses nacionales de algunas instituciones fundamentales, traban la acción del gobierno orientada al logro de los objetivos de la reconstrucción y el desarrollo nacionales, así muchos proyectos de ley, importantes para la marcha del país, quedan encarpados por irresponsabilidad, decidía, holgazanería de los mal llamados Padres de la Patria.

Para llevar a cabo el Autogolpe, Fujimori había sido apoyado por mandos militares, alianza que se había encargado de plasmar Vladimiro Montesinos. Es indudable que el autogolpe, consolidó la alianza entre el fujimorismo y los militares, aumentando significativamente la presencia de estos últimos en las decisiones del gobierno. Desde su llegada al poder Fujimori tenía en mente efectuar una acción de esta índole, con el objetivo de tener el control total de las principales instituciones del Estado. La noche del 5 de abril se anunció el establecimiento de un Gobierno de Emergencia, el cual tendría entre sus objetivos, reemplazar la Constitución de 1979, moralizar radicalmente el Poder Judicial, modernizar la administración pública, y principalmente promover la economía de mercado dentro de un marco jurídico que de seguridad y fomenta la eficiencia y competitividad de los agentes económicos.



4.2. DISCUSIÓN

La memoria es la escenificación material de la existencia de violencia política en la historia precedente del país. En ella se ensamblan las memorias del pasado dictatorial con las experiencias del presente democrático. La convicción ingenua de que dictadura y democracia eran sistemas opuestos se ha diluido dejando en su lugar la idea de que la violencia política —como hecho factual o como amenaza— forma parte de toda acción política (Piper, 2015) en el país de todas las sangres. De tal manera, si inicia una discusión sobre el fenómeno del poder, descubrimos pronto que existe un acuerdo entre todos los teóricos políticos, de la Izquierda a la Derecha, según el cual la violencia no es sino la más flagrante manifestación de poder. «Toda la política es una lucha por el poder; el último género de poder es la violencia», ha dicho C. Wright Mills, haciéndose eco de la definición del Estado de Max Weber: «El dominio de los hombres sobre los hombres basado en los medios de la violencia legitimada, es decir, supuestamente legitimada» (Arendt, 2006).

En los países subalternos de AL los golpes de Estado han sido una constante, de manera que, el Perú no ha sido la excepción. En esa lógica, la dictadura autoritarista y fundamentalista que se caracterizaba por un monótono líder han debilitado casi por completo a los gobiernos pluralistas como es el caso boliviano y otros gobiernos con inclinaciones fuera del neoliberalismo. Cuando existe lo a priori, entonces, existe la ambivalencia entre las ideologías dictatoriales y las democráticas que en cierto sentido no han podido converger en los pueblos diversos. En la NAM se apuesta por gobiernos pluralistas que respeten la dignidad, la igualdad, la solidaridad y la justicia.

La política represiva de la dictadura, que empleó mecanismos clandestinos para la eliminación física de los oponentes, provocó la rápida desarticulación de las redes organizativas locales y un éxodo que dispersó a los perseguidos en el extranjero (Cristiá,



2018). Por medio del olvido también es posible observar cómo diferentes grupos y entidades que promueven la memoria y los derechos humanos carecen de un cuestionamiento de otras formas de violencia y dominación simbólicas ocultas detrás de las soluciones institucionales que parecen garantizar la emancipación de las memorias de la (pos)dictadura. Ésta es la dialéctica de la memoria entre recuerdo y olvido que constituye a las memorias colectivas (Del Valle, 2018).



V. CONCLUSIONES

PRIMERA: Las consecuencias de la dictadura cívico militar del gobierno de Alberto Fujimori, durante los años 1990-1992, son trascendentales y considerables con miles de desaparecidos y asesinatos a luchadores sociales, campesinos, dirigentes y cientos de miles de esterilizaciones forzadas a mujeres. La tasa de víctimas reportadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la violencia ocasionó 1 millón 200 mil muertos y desaparecidos. A partir de 1992 con el autogolpe y captura de Abimael Guzmán inicial la dictadura cívico militar en el Estado peruano.

SEGUNDA: Las consecuencias de la violencia y el terrorismo la desarticulación y el duro golpe a todo el movimiento políticos de izquierda, social, estudiantil y obrero producto de la dura criminalización de la protesta y la fuerte represión envueltas bajo la sombra del resurgir de Sendero Luminoso, marcó un gran retroceso en el desarrollo del país. Alberto Fujimori utilizó el autoritarismo, entendido no solo como el uso de la violencia y de una conducción vertical y personalista del Estado, sino como el recurso permanente a la excepcionalidad como razón, excusa o fuente del orden estatal y social.

TERCERA: Alberto Fujimori en el Estado peruano implementó el sistema neoliberal, que fue sobre la base del desmonte de las reglas de la democracia liberal. El desarrollo del neoliberalismo exigió la implantación de un Estado terrorista que destruyó numerosas organizaciones políticas, populares, sindicatos para cumplir con los propósitos de la monopolización transnacional. En el Perú se aplicaron las recetas del Consenso de



Washington, la forma como se hicieron las reformas y sus resultados, dependieron de cómo estaba el Perú. Pero también influyó de manera decisiva el entorno internacional que, marcado por el signo de la globalización y la apertura comercial financiera. El Consenso de Washington se convirtió en una especie de ideologización económica, las políticas económicas dejaron de ser simples propuestas y pasaron a ser un instrumento de control político y económico para el país interesado en insertarse y conseguir el sello de aprobación de las economías altamente desarrolladas y de los organismos internacionales.

CUARTA: El autogolpe del 5 de abril 1992, el gobierno de Alberto Fujimori logró imponer una sólida correlación de apoyo nacional contra el rechazo que pudo tener entre los países de la OEA e incluso de Canadá. La relación entre el fujimorismo y la comunidad internacional y, en particular, los Estados Unidos no fue siempre de perfecta sintonía. La decisión del autogolpe fue interna, al margen de que pudo ser de conocimiento de agencias de inteligencia extranjeras. Nació y se cristalizó en la relación de Fujimori, Montesinos y la cúpula de las Fuerzas Armadas. La justificación sobre todo pública fue la urgencia de derrotar a Sendero Luminoso; pero hubo otras razones también importantes, como que el gobierno requería que se expresara la nueva correlación que se había constituido en esos escasos dos años, radicalmente distinta a la de 1990.



VI. RECOMENDACIONES

- PRIMERA:** A las distintas universidades de la Región de Puno e institutos superiores de formación pedagógica insertar en sus estructuras curriculares la Realidad Nacional del siglo XX como es el caso de la violencia o terrorismo en el Perú, de esta manera aporta a la historia peruana.
- SEGUNDA:** A los estudiantes de Pre y Posgrados de las universidades de las facultades de educación, Historia y otras de nuestra región seguir las líneas de investigación, en estos periodo se observa investigaciones realizadas por estudiantes de las universidades de la capital de Lima, y en menor cantidad investigaciones realizadas por estudiantes de nuestra región de Puno.
- TERCERA:** A los docentes, autoridades de Educación Básica Regular, docentes de educación superior de la Región de Puno y a la comunidad académica, a través de las Instituciones, organizar eventos de discusión y análisis en el área de Ciencias Sociales, en Congresos regionales, simposios, seminarios, talleres, cursos, publicaciones, etc.



VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arce, G. A. (2011). *La herencia del pasado fuerzas armadas, derechos humanos y seguridad interior en el Perú contemporáneo*. Tesis optar el Título de Licenciado en Ciencia Política y Gobierno en la PUCP . Lima: PUCP.
- Boloña , C. (1993). *Cambio de rumbo: El programa económico para los 90*. Lima: Instituto de Economía de Libre Mercado y San Ignacio de Loyola.
- Burt, J.-M. (2009). *Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori*. . Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Butron , I. R. (2018). *El neoliberalismo en américa latina, el Perú y su relacion con el proceso de privatización en arequipa 1980 – 2002*. Tesis para optar el Título Profesional de: Licenciado en Historia en la UNSA. Arequipa: UNSA.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación. (23 de Agosto de 2003). *Verdad y Reconciliación*. Obtenido de <http://www.cverdad.org.pe/pagina01.php>
- Davidson, P. (2003). *¿Qué es erróneo en el consenso de Washington y qué debemos hacer?, segundo semestre*. Bogotá: Cuadernos de Economía No 39,.
- Degregori, C. I., & Grompone, R. (1991). *Demonios y redentores en el nuevo Perú*. Lima: IEP ediciones.
- Duárez, J.L. (2016). *Los estudios sobre el neoliberalismo en el Perú Entre legitimadores del discurso y críticos de la dominaciónI*
- Escárzaga, F. (2001). *Auge y caída de sendero luminoso*. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 75-97.



- Figuroa, C. (23 de Enero de 2018). *Dictadura militar y transición democrática en centroamérica*. Obtenido de <file:///C:/Users/Compaq/Downloads/Dialnet-DictaduraMilitarYTransicionDemocraticaEnCentroamer-6521231.pdf>
- Gamero, C. (2008). *Fujimori. La lucha por la defensa de los derechos humanos en la historia reciente del Perú*. Revista de Comunicación Vivat Academia, 20-90.
- Gaviria, M. A. (1992). *Neoliberalismo y desarrollo en América latina, una discusión sobre las reformas estructurales promovidas por el "Consenso de Washington"*. Reviste Académica e Institucional de la U.C.P.R., 1-21.
- Gonzales, E., & Samame, L. (1994). *El Péndulo peruano: políticas económicas, gobernabilidad y subdesarrollo*, Serie Análisis Económico. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Haykal, I. (21 de Octubre de 2019). *Sociedad, Política, Ética*. Obtenido de <https://psicologiymente.com/social/tipos-de-dictadura>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2010). *Metodología de la investigación*. Quinta edición. Mexico: Mcgraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. DE C.V.
- Honorio, J. (2009). *Neoliberalismo y genocidio en el régimen fujimorista*. Haol, 65-75.
- Jiménez, F. (2001). *El modelo neoliberal peruano: límites, consecuencias sociales y perspectivas*. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Jiménez, F. (22 de Diciembre de 2019). *Files. PUCP.EDU.PE*. Obtenido de <http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2001-05-07.pdf>



- Knobel, M., & Lankshear, c. (2002). *Tres Enfoques para la Investigación Educativa*. . México: Editorial UNAM. México: Editorial UNAM.
- Linz, J. (1986). *Del autoritarismo a la democracia*. Revista Estudios Públicos, Santiago, 5-58.
- López, F. (2002). *El análisis de contenido como método de investigación*. España: Revista de educación. Universidad de Huelva . España: Revista de educación. Universidad de Huelva.
- Lopez, S. (1993). *¿A dónde va la democradura?: los avatares de la transición*. Cuestión de Estado, Año 1, 28-32.
- Martínez, R., & Reyes, E. S. (2012). *El Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina*. *Política y Cultura*, primavera núm. 37,, 35-64.
- Menze, E. (12 de Octubre de 1981). *Wikipedia*. *Obtenido de Totalitarismo*: <https://es.wikipedia.org/wiki/Totalitarismo>
- Neira, E. (22 de Diciembre de 2019). *Saber Aula*. *Obtenido de* http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/35263/mundoglobal_21052012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Obando, E. (2000). *Fujimori y las Fuerzas Armadas*. Lima: Universidad del Pacifico-IEP.
- Ortiz, C. (22 de Junio de 2014). *Guías didácticas sobre cultura democrática*. *Obtenido de FUNDE*: <http://www.repo.funde.org/939/7/Autoritarismo.pdf>



- Pease , H. (2003). *La autocracia fujimorista: Del Estado intervencionista al Estado mafioso*. Lima: PUCP.
- Pease, H., & Romero , G. (2013). *El estado neoliberal. En: La política en el Perú del siglo XX*. Lima: PUCP.
- Pedraglio, S. (2014). “*Cómo se llegó a la dictadura consentida. El gobierno de Alberto Fujimori: 1990-1992*”. Tesis para optar el grado académico de Magíster en Sociología, UNMSM. Lima: UNMSM.
- Peña, L. (29 de Agosto de 2009). *CSIC - CCHS. Madrid. Obtenido de <https://digital.csic.es/bitstream/10261/18910/1/toluca.pdf>*
- Pereyra, O. (02 de Agosto de 2018). *Lanic. Obtenido de Políticas Sociales en la Lima Neoliberal (1990 – 2004)*. : <http://lanic.utexas.edu/project/laoap/claspo/rtc/0055.pdf>
- Petrera, M., & Cordero, L. (1999). *El aseguramiento público en salud: factores que intervienen en la elección de proveedor*. Lima: Instituto Cuanto, UNICEF, AID.
- Plano, J. (1967). *The American Political Dictionary*. New York: Winston Inc.
- PUCP. (2009). *El sistema político durante el proceso de violencia*. Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Quiroz, A. (2013). *Conspiraciones corruptas, 1990-2000. En: Historia de la corrupción en el Perú* . Lima: IEP-IDL. Consorcio de Investigación Económica. .Reátegui , F. (2009). *El sistema político durante el proceso de violencia*. Selección de textos del Informe Final de la CVR. Lima: Idehpucp.



- Reyes, L. (2018). *Neoliberalismo, pobreza y políticas sociales en el Perú de los noventa*.
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, año IV, n° 14, 61-74.
- Tamayo, M. (1998). *Aprender a investigar*. Cali, Colombia: Arfo Editores Ltda.
- Tannahill, R. N. (1976). *The Performance of Military Governments in South America*.
Journal of Political and Military Sociology, 233-244.
- Tramontana, D. (21 de Enero de 2019). *Violencia y terrorismo en el Perú. Obtenido de la violencia terrorista en el Perú, sendero luminoso, y la protección internacional de los derechos humanos:*
[http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/BD0C6CC2DA0E3A8E05257BF1001AA8BB/\\$FILE/La_violencia_terrorista_en_el_Per%C3%BA_I.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/BD0C6CC2DA0E3A8E05257BF1001AA8BB/$FILE/La_violencia_terrorista_en_el_Per%C3%BA_I.pdf)
- Vargas, T. D. (2006). *Neoliberalismo y pobreza en el Perú 1985-2000*, (Tesis para optar el Grado de Magister en Economía con Mención Política). UNMSM. Lima - Perú: UNMSM.
- Villegas, P. (2011). *El impacto político de las negociaciones entre el régimen de alberto fujimori y el pcp-sl en el contexto electoral del referéndum de 1993*. tesis para optar el título de licenciado en historia en la *PUCP* . Lima, Perú: PUCP.



ANEXOS



ANEXO A: MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO	OBJETIVOS	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN	INSTRUMENTO
LA DICTADURA CÍVICO MILITAR DEL GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI 1990-1992	<p>Objetivo General: Analizar las consecuencias de la dictadura cívico militar del gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1992</p>	<p>Problema General ¿Cuáles fueron las consecuencias de la dictadura cívico militar del gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1992?</p>	<p>Método de investigación: - Cualitativa</p> <p>Diseño de investigación: - Investigación histórica</p>	<p>Análisis de Documentos, registros y materiales</p>
	<p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Interpretar la violencia y el terrorismo en el gobierno de Alberto Fujimori 1990-1992, ➤ Analizar el nuevo orden económico y el neoliberalismo en el gobierno de Alberto Fujimori 1990-1992. ➤ Describir el autogolpe y la dictadura cívico – militar en el 	<p>Problemas específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ¿Qué consecuencias generaron la violencia y el terrorismo en el gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1992? ➤ ¿Cómo se implementó el nuevo orden económico y el neoliberalismo en el gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1992? ➤ ¿Porque el autogolpe y la dictadura cívico – militar en el gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1992? 		



	gobierno de Alberto Fujimori, 1990- 1992.			
--	---	--	--	--